SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 20/12/2017

12.- Lavado de activos. (Actualización de la normativa vigente)

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Lavado de activos. (Actualización de la normativa vigente)".

—En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Alfredo Asti.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar agradecimiento a mis compañeros de bancada de la Comisión por haberme permitido hacer este informe, dado que sobre este tema vengo trabajando desde mi primera legislatura, y voy por la tercera y última. Por eso, creo que esta ley integral es un broche de oro para terminar este trabajo, aunque seguramente en el futuro podremos seguir perfeccionándola, con alguna otra norma.

Es importante señalar que este proyecto es el fruto del trabajo del grupo ad hoc del Comité Operativo, creado oportunamente por la Secretaría Nacional Antilavado con el objetivo de redactar una nueva normativa en materia de lavado de activos, terrorismo, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, a fin de adecuar nuestra realidad a las nuevas exigencias internacionales y, asimismo, atender la necesidad de modificaciones normativas en nuestro país, identificadas por los distintos organismos. Cabe destacar que dicho Comité estuvo integrado por representantes de los tres Poderes del Estado. En este Comité Operativo trabajamos -como decíamos- varios legisladores y asesores de nuestra Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado, con representantes de los ministerios, jueces y fiscales del Crimen Organizado, organismos de contralor y prevención. Originalmente, el proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2016. Ingresó al Senado y fue derivado a la Comisión Especial que conocemos como de "Panamá Papers". Luego de un largo tratamiento en esa Comisión, que contó con la participación de representaciones de los organismos involucrados, de los sujetos obligados, de las cátedras, etcétera, esta lo aprobó con algunas variantes al proyecto original del Poder Ejecutivo, y en agosto de 2017 se aprobó en el plenario por veintisiete votos en veintiocho presentes.

Ingresó a la Cámara de Diputados y fue derivado a nuestra Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado, que le dio un tratamiento acorde en varias sesiones y contó con múltiples asesoramientos. Como había sido previsto, fue aprobado sin modificaciones el 7 de diciembre. Lamentablemente, por no encontrarse en sala algunos integrantes de la Comisión, el proyecto solo contó con los cuatro votos del Frente Amplio. El proyecto busca ordenar, sistematizar, independizar y actualizar la normativa vigente en materia de lavado de activos.

Nuestro país tiene ya una larga normativa sobre el tema, comenzando con un decreto ley de la dictadura, actualizaciones y ampliaciones en democracia

-1998, 2004, 2009, 2012- y diversas disposiciones, con artículos referidos al tema, en normas de instancia presupuestal. Era necesario ordenar todo esto, separarlo de la legislación antidroga -que fue donde comenzó a tratarse- y actualizarlo con respecto a tendencias y compromisos internacionales como las cuarenta recomendaciones que ha realizado el organismo internacional, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La tendencia actual es considerar el delito de lavado de activos como un delito autónomo, que protege un bien jurídico distinto a los que son vulnerados en los delitos precedentes. Las recomendaciones del GAFI, los tratados internacionales y la legislación comparada marcan esta posición. La mayoría de quienes han estudiado la problemática vinculada al lavado de activos se inclina hoy por afirmar que las maniobras de lavado constituyen un grave ataque al orden socioeconómico.

Es importante señalar que el delito de lavado de activos es independiente y debe ser diferenciado del encubrimiento, ya que son conductas en las que se afectan bienes jurídicos distintos. En el delito de lavado de activos, el delincuente busca distanciar los bienes que ha obtenido de forma ilícita para poder, progresivamente, ingresarlos en los cursos económicos normales del mercado, por lo que desde nuestro punto de vista está claro que el lavado de activos es algo más que una simple forma de disimular la ilicitud de las ganancias obtenidas y obstaculizar la investigación de las autoridades. Se entiende que el delito de lavado de activos afecta -como decíamos- el orden socioeconómico del Estado.

El objetivo de los lavadores de activos es legitimar su riqueza y, para ello, introducen la masa patrimonial ilícita en el ámbito de los negocios aparentemente legales. Así pues, aquellos empresarios que actúen dentro del tráfico honesto, siempre sometidos a las exigencias derivadas de la oferta y demanda y de las regulaciones gubernamentales, se ven obligados a concurrir con otros agentes que pueden permitirse el lujo de actuar en el mercado al margen de toda clase de racionalidad económica atentando gravemente, con ello, contra la autonomía, las actividades y los intereses de las empresas regulares.

En consecuencia, el costo de los recursos disponibles por vía ilegal es, al menos desde la perspectiva estrictamente pecuniaria, muy inferior al de aquellos obtenidos de manera lícita. Por ello, la reintroducción de la riqueza sucia a los cauces regulares de la economía siempre genera distorsiones en el funcionamiento normal de los mercados, anomalías que, en el último extremo, pueden conducir a una progresiva supresión de la competencia.

La posibilidad de acudir a una financiación bastante menos costosa hace que las empresas legales, sometidas a los costos habituales, sean primero marginadas y, luego, expulsadas del mercado, ámbito en el cual la empresa financiada con capital ilícito tiende a erigirse en monopolio. Esa alteración del equilibrio del mercado conlleva un efecto perjudicial que es devastador a nivel macroeconómico.

No es de extrañar, pues, que en un gran número de países la penalidad prevista para el lavado de activos no sea menor a la que se atribuye, por ejemplo, al narcotráfico. Como decíamos, hasta ahora en nuestro país ambas legislaciones están íntimamente relacionadas.

Nos encontramos ante una sustantividad autónoma que debe ser tratada con independencia de los hechos a partir de la cual se obtenga la riqueza a reciclar. Con respecto al tema, el Reglamento Modelo de la OEA en su artículo 2.7 señala: "La persona que cometa un delito de lavado de activos y una actividad delictiva grave vinculada al mismo, podrá ser condenada por ambos".

Desde el año 2008, a pesar de que nuestro país no cuenta con una norma expresa que lo establezca -es lo que se está proponiendo en este proyecto con la figura del autolavado que se incorpora en el capítulo correspondiente-, la jurisprudencia nacional ha entendido que al ser el lavado de activos un tipo autónomo e independiente del delito base, el autor de delitos precedentes puede ser autor o partícipe del lavado de activos.

Es importante considerar que el delito de lavado de activos es un crimen no tradicional, y que es la forma que tiene la criminalidad organizada para sustentar sus actividades ilícitas en el ámbito transnacional. A partir de las enormes e incalculables sumas de dinero que maneja el crimen internacional, se ocasiona un daño continuo a la economía, no solo de los Estados, sino de la comunidad internacional. Si la finalidad del derecho penal es proteger bienes jurídicos respetando las garantías constitucionales y, esencialmente, el debido proceso, no encontraremos reparo alguno en argumentar a favor de la autonomía del delito de lavado de activos en los supuestos en que el delito previo se compruebe a partir de indicios que permiten afirmar, conforme a las reglas de la sana crítica, que el dinero de los activos incautados provienen de un delito. El problema reside en que lo que se exige es el cambio de un paradigma en vigencia ante la nueva criminalidad organizada y transnacional.

El Tribunal Supremo español establece que los indicios más determinantes para tipificar el delito de lavado de activos han de consistir en comprobar un incremento inusual del patrimonio, en la inexistencia de negocios lícitos que puedan ser motivo de ese incremento y el vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes u otras actividades delictivas. No basta con la mera tipificación del delito de lavado y su concepción como delito autónomo del hecho criminal previo, sino que es fundamental permitir a los operadores herramientas indispensables para descubrir esas acciones delictivas.

La realidad es que la criminalidad organizada posee nuevos mecanismos y herramientas para cometer delitos, por lo que es totalmente necesario que el Estado cuente con las herramientas para combatirla, esto es, la figura delictiva y la utilización de medios probatorios y su valoración en forma dinámica, superadora de viejas concepciones que no pueden aplicarse ante la criminalidad moderna, evitando así las parcelas de impunidad que podrían generarse en otro caso con respecto a los integrantes de estas organizaciones delictivas.

El lavado de activos es una actividad criminal muy compleja, que se vale de un inagotable catálogo de técnicas o procedimientos en continua transformación y perfeccionamiento, en el cual la vinculación con el delito que le precede no puede supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de accesoriad que puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma. La autonomía del delito de lavado con respecto al delito precedente es esencial para que la respuesta penal, frente a las estructuras económicas de la criminalidad organizada, sea realmente eficaz, y la consecuencia de su

configuración como delito autónomo es que no se requiere condena ni proceso previo por el delito fuente, de manera que el origen criminal debe ser demostrado como un aspecto más del delito en la propia investigación penal abierta con tal motivo. Si la característica fundamental de esta figura delictiva, a los efectos de su aplicación práctica, es su naturaleza autónoma e independiente sin acceso-riedad con respecto al delito previo, en buena lógica no cabe exigir la plena prueba de un ilícito penal concreto y determinado generador de los bienes y ganancias que son lavados, sino la demostración de una actividad delictiva.

En conclusión, el concepto de autonomía del delito tiene consecuencias en la posibilidad de considerar al autor del hecho previo como autor del delito de lavado y, asimismo, en utilizar la prueba indiciaria como pauta para comprobar la presencia ilegítima de los fondos.

Haremos una breve referencia a los nueve capítulos que integran el articulado, pese a que después podremos ahondar en ellos con el apoyo de algunos compañeros más expertos en temas jurídicos.

El primer capítulo es sobre la organización institucional, y se basa en la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que tiene una amplia participación, y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en relación con los distintos organismos públicos que deben prestar su colaboración.

Este capítulo también incluye una novedosa disposición para nuestro país – ya establecida en otras jurisdicciones-, que prohíbe a las principales autoridades nacionales, durante la vigencia de sus mandatos, tener vínculos con empresas domiciliadas en paraísos fiscales.

El segundo capítulo determina normas que procuran que el sistema preventivo sea más efectivo, destacándose la ampliación de la nómina de sujetos obligados no financieros con la finalidad de mejorar la prevención y la detección de operaciones inusuales o sospechosas en áreas que pueden presentar riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, disposiciones no contempladas en la legislación vigente.

Se regulan las situaciones en las que se debe realizar la debida diligencia del cliente y, asimismo, se reafirman las garantías de los sujetos obligados.

Hago notar que en el Senado se recogieron varias solicitudes de cambios de los representantes de estos sujetos obligados para facilitar su actuación y dar más garantías.

Seguramente, la reglamentación del Poder Ejecutivo recogerá con claridad la diferenciación entre las distintas categorías de obligados -financieros o no-, y sobre la debida diligencia, la conservación de documentación, el seguimiento de casos, etcétera.

El tercer capítulo establece normas sobre el intercambio de información internacional con organismos nacionales relevantes para la lucha contra el lavado de activos o actividad delictiva, siempre asegurando la máxima reserva y, si correspondiera, con conocimiento de la Justicia penal.

El cuarto capítulo, sobre transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos, determina la obligación de comunicarlos, y cuáles serían las sanciones en caso de infringir la norma.

El quinto capítulo, que refiere a los delitos de lavado de activos y sus penas -que se mantienen sin cambios respecto a los vigentes- incluye nuevos delitos precedentes de lavados de activos, en particular, el delito fiscal -con determinados umbrales-, permitiendo superar una de las mayores carencias en nuestra normativa actual, circunstancia exigida por la normativa internacional.

Reitero que en este capítulo se incluyen nuevos delitos que podrían catalogarse como comunes, pero solo cuando superan determinados montos y son cometidos por grupos delictivos organizados, ya que se constata que muchos de sus integrantes han transformado su actividad delictiva en un medio de vida que les provee de sustento, entre otras cosas, para otras actividades económicas.

También se configura la condición de delito autónomo al autolavado de activos, y la investigación económica financiera paralela para rastrear conexiones y activos provenientes de la actividad delictiva.

El capítulo sexto, sobre medidas cautelares, recoge normas anteriores que se consideran imprescindibles para la protección del derecho del Estado a disponer de esos bienes.

El capítulo octavo contiene las técnicas especiales de investigación -fundamentalmente, datan del 2009-, que permiten al Estado mejorar su eficiencia ante las organizaciones delictivas transnacionales, con grandes recursos económicos y logísticos.

El capítulo noveno de cooperación jurídica penal internacional incluye artículos sobre remisiones y derogaciones.

Como hemos dicho, consideramos este proyecto como una base importante e imprescindible en la sistematización y actualización de la normativa para la lucha contra el lavado de activos. Podemos tener algunos matices en unas pocas disposiciones del texto; en otras circunstancias podríamos haber propuesto modificaciones, ampliaciones o mayor precisión, pero ninguna de ellas reviste la importancia como para demorar la aprobación del proyecto, ya que esas observaciones no obstan al objetivo principal de la norma integral que, en algunos casos, pueden ser subsanadas con la reglamentación o con nuevas normas que conjuntamente con la evaluación de la aplicación de este proyecto -a partir de su entrada en vigencia- puedan estudiarse y aprobarse.

Por todas estas razones, proponemos la aprobación del proyecto, a efectos de finalizar el tratamiento legislativo y su envío al Poder Ejecutivo para ser promulgado y posteriormente reglamentado.

Es necesario aprobar este proyecto, teniendo en cuenta compromisos internacionales y futuras revisiones que se realizarán entre pares a través del GAFI, que en este tema guía la acción de los distintos Estados, además de vincularlos con las convenciones de las Naciones Unidas. En nuestra región en particular esto es llevado adelante por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica, Gafilat, institución de la que nuestro país forma

parte a partir de la Ley N° 17.532 del año 2002 y ha llegado a presidir recientemente.

El lavado de activos representa un enorme beneficio económico para los criminales, pues permite esconder y legitimar ganancias procedentes de actividades ilegales y financiar una variedad de otras actividades delictivas, además de mejorar sus estilos de vida.

He aquí la importancia de llevar a cabo e implementar un sistema que impida a las organizaciones delictivas disponer de sus ganancias, incrementar su riqueza, el poderío económico y las posibilidades de accionar en otras áreas, inclusive, en la corrupción.

Debemos adoptar todas las acciones necesarias para evitar que los criminales se fortalezcan económicamente y, al mismo tiempo, tomar las medidas pertinentes para que el dinero y los activos decomisados puedan utilizarse para robustecer las instituciones encargadas de combatir los lavados de activos y el financiamiento del terrorismo.

Por estos motivos -este proyecto fue votado en la Comisión por la unanimidad de presentes; como dijimos al inicio, solo estábamos los integrantes de la bancada del Frente Amplio, porque por distintos motivos los integrantes de la oposición en la Comisión no concurrieron-, solicitamos una vez más que el proyecto sea aprobado y a la brevedad se remita al Poder Ejecutivo.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora diputada Graciela Bianchi Poli.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: no se va a alterar en absoluto el muy buen clima con el que trabajamos en la Comisión Especial, pero debo decir que nosotros nunca faltamos, y así le consta a la secretaría y a los colegas. Ese día coincidió que teníamos una actividad partidaria que no podíamos eludir.

(Murmullos)

—No pensamos que el proyecto se aprobara en esas condiciones, pero no habrá problemas porque lo vamos a votar, aunque tenemos algunas discrepancias puntuales.

Señor presidente, le pido que me ampare en el uso de la palabra...

—...si algún día tomáramos conciencia de la importancia que tiene la aprobación de estos proyectos, nos ahorraríamos muchos problemas.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Le asiste derecho a la señora diputada.

Solicito a mis colegas guarden silencio en sala a efectos de escuchar la intervención de la señora legisladora y para que sea posible tomar la versión taquigráfica.

Puede continuar la señora diputada Graciela Bianchi Poli.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Gracias, señor presidente.

Entendemos que es un tema muy árido y técnico, pero para el país es muy importante porque no solo regulará lo que suceda en forma interna, sino también internacionalmente.

Este proyecto, remitido por el Senado el 15 de agosto, desde el comienzo tuvo un trámite parlamen-tario errático porque debió haberse remitido a la Comisión Especial que esta Cámara tiene sobre el tema -es la única-, pero por esos avatares de la política se destinó al Senado, a la Comisión creada por los famosos papeles de Panamá, y jurisdicciones similares.

Esto distorsionó el estudio del tema. Reivindico lo que hace un momento afirmó el diputado Alfredo Asti con respecto a que con todo placer formamos parte del Comité Operativo, funcionando en la Presidencia de la República, en la Secretaría Antilavado, con el liderazgo de nuestro estimado y lamentablemente fallecido licenciado Carlos Díaz, que no pudo ver culminado su trabajo de muchos años.

De todas formas, el contador Espinosa continúa trabajando en el mismo sentido; todos lo hacíamos con mucha empatía porque desde el primer momento entendimos que se trataba de un tema muy técnico y lo enfocamos como debe hacerse con todas las políticas importantes del país, es decir, como una política nacional. Debo reconocer que -en lo que a mí respecta- la oposición fue sumamente respetada y tenida en cuenta con su trabajo. Obviamente, después juegan las mayorías.

Este Comité Operativo de rango legal -está bien; creo que hay mucho desconocimiento en este tema- está integrado por los tres Poderes del Estado: Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Más allá de que se legisla en el Parlamento, dadas las características del tema, decidimos participar y colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Nuestra decisión estuvo motivada porque si bien no compartíamos el criterio de legislar fuera del Parlamento, entendimos que así podía salir este proyecto, con el que tenemos discrepancias, pero que para el país es muy importante, dado los controles que se establecen, de tipo internacional.

Quienes participamos en ese Comité Operativo en representación del Partido Nacional no dimos nuestro voto de apoyo por las razones antedichas, es decir, porque entendemos que se legisla en el Parlamento y porque el partido al que pertenecemos tenía que discutirlo.

El lavado de activos y los delitos precedentes, recogidos en el presente proyecto, forman parte de la inserción internacional de Uruguay. Este proceso se inició en setiembre de 1982, a través del Decreto Ley Nº 15.322, de intermediación financiera. El país y el mundo cambiaron mucho y tuvimos que entender que ser solo una plaza financiera no nos dio resultado. Necesitamos entender -creo que lo hemos comprendido- que la actividad financiera debe ser compatible con las actividades productivas.

El nudo gordiano del tema que hoy nos ocupa es la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, controlado internacionalmente por el Grupo de Acción Financiera -de aquí en adelante, GAFI, para abreviar- y sus oficinas regionales, Gafisud, para Sudamérica y, como hoy está integrado por los países de América Central y del Caribe, Gafilat.

Gafisud evaluó a Uruguay en los años 2002, 2006 y 2009, aplicando las cuarenta y nueve recomendaciones, cuarenta de las cuales refieren a la prevención del lavado de activos, y nueve, al financiamiento del terrorismo.

Todos recordamos que a fines del año 2009 Uruguay soportó la sospecha de ser paraíso fiscal, con todo lo que ello representó -y pudo haber representado, si no se hubiera actuado con diligencia- para la economía nacional.

Asimismo, a partir de la crisis del año 2001, el país inició modificaciones a las normas banco-centralistas, a través de la acción de inteligencia financiera que regula y lleva a cabo el Banco Central.

Cada vez que el Gafilat nos evalúa, lo hace en relación con las recomendaciones a las que hicimos referencia *ut supra*, estableciendo sus niveles de cumplimiento. Entre 2006 y 2009, en lo que refiere al cumplimiento total de las reglamentaciones, Uruguay pasó de 17 a 29; en cuanto al cumplimiento parcial, pasó de 8 a 9, y el no cumplimiento disminuyó, pasando de 15 a 2.

Como en muchos aspectos, en lo que refiere a la inserción internacional, el país debe tener cuidado en el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales -en esto, el Partido Nacional quiere hacer hincapié-, pero respetando la soberanía y la Constitución. El Partido Nacional no se apartará en ninguna de sus consideraciones de estos preceptos básicos para que la República siga siendo democrática y, por supuesto, soberana.

La clave para la elaboración de un proyecto de ley sobre esta materia es tener en cuenta cuáles de las recomendaciones de Gafilat y del G-20 son "obligatorias" -entre comillas- o, mejor, en nuestro concepto, "ineludibles" -también entre comillas- y cuáles el país puede decidir si adopta.

El Partido Nacional no atravesará el límite de lo anteriormente expuesto. Entiende que el Estado uruguayo debe defender su soberanía en conjunto con los otros países de América Latina, sin ceder un paso más allá de lo que las circunstancias internacionales nos exijan. Inclusive, fiel a su tradición, deberá cuestionar, aportando -hago hincapié en esto- cuando se considere que algo no es beneficioso para el país.

Al día de hoy, de acuerdo con la legislación vigente, GAFI establece, con respecto a once de las cuarenta recomendaciones que considera fundamentales, que Uruguay cumple totalmente con nueve de ellas y, en parte, con dos.

Primera advertencia: el análisis del presente proyecto de ley debe hacerse bajo la óptica de que no estamos cumpliendo con las obligaciones internacionales en forma absoluta, sino que en muchos aspectos estamos legislando por decisión del Poder Ejecutivo. La inspección que nos hará Gafilat en el año 2019 no debe infundirnos temor. En este sentido, recurrimos a las palabras del presidente del Directorio del Banco Central, economista Mario Bergara, en ocasión de ser recibido en el mes de julio de 2016 en la Comisión del Senado referida *ut supra*: "[...] para tener una perspectiva de la evaluación de Uruguay en el contexto de Gafisud, debemos tener a la vista la comparación con los demás países que la integran. [...] Uruguay tiene una de las mejores evaluaciones mientras que varios de los países de la región las tienen

evaluaciones realmente preocupantes. El Uruguay está claramente entre las mejores evaluaciones con respecto a las 40 recomendaciones del GAFI en lo que respecta al Lavado de Activos. [...] nuestro país tiene una mejor evaluación en la recomendación relativa al Lavado de Activos que 17 de los 19 países del G-20. O sea que tenemos una evaluación razonable, incluso en comparación con los países desarrollados". Queremos hacer hincapié en esto. Continúa: "Hacemos esto mismo para las 9 recomendaciones sobre financiamiento del terrorismo. [...] También es muy buena la evaluación comparativa en relación con los 19 países del G-20".

Recordemos que el G-20 fue creado en 1999 por los bancos centrales de veinte naciones. La primera reunión fue organizada por los ministerios de finanzas de Canadá y Alemania; tuvo lugar en la ciudad de Berlín y su principal finalidad fue tratar asuntos clave para la economía mundial. El G-20 fue creado como una respuesta tanto a la crisis financiera ocurrida a finales del año 1990 como al poco compromiso de muchos países frente a dicha crisis. Cuando se habla de crisis en el país y se la ubica temporalmente, debemos considerar la situación internacional. De lo contrario, no podremos decidir internamente lo que tenemos que hacer y nos equivocaremos.

Hay una segunda advertencia que el Partido Nacional desea realizar en lo que refiere a la nueva norma sobre lavado de activos: se debe mantener un delicado equilibrio -pero equilibrio al fin- entre la necesidad de fortalecer la regulación del sistema financiero, los delitos que se puedan cometer dentro de este y la posibilidad de ampliar la información en el marco de lo que técnicamente llamamos inteligencia financiera.

No debemos confundir las recomendaciones realizadas en este marco como, por ejemplo, las que hacen la Organización Internacional de Comisiones de Valores, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. En este ámbito, Uruguay ha profundizado en forma sistemática el fortalecimiento de la inteligencia financiera, instituyendo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que funciona en la órbita del Banco Central y fue creada en el año 2001.

Desde 2010, Uruguay forma parte del Grupo Egmont, conformado por ciento veinte jurisdicciones de inteligencia financiera, que no corresponden a Estados. Ponemos énfasis en esta primera aclaración: algunas de estas organizaciones están integradas por Estados, pero otras, por jurisdicciones que no corresponden a estos.

La UIAF debe ser una institución fundamental para el lavado de activos y su prevención, pero siempre sobre la base de la intervención preceptiva de la Justicia. El Partido Nacional no cederá en este aspecto, porque no es imposición de ningún organismo estatal o jurisdiccional internacional, sino una clara orientación institucional del Gobierno, llevada adelante por el Frente Amplio.

En este proceso, el Partido Nacional está dispuesto a acompañar las medidas modificativas del secreto bancario -las que ya se han llevado a cabo y las que puedan proyectarse-, siempre que no se vulneren los principios constitucionales de libertad y derecho a la privacidad.

No negamos el proceso de cambio de la economía mundial y la consolidación de la globalización, pero defenderemos a ultranza el derecho del

Estado uruguayo a no ser víctima de los embates de las grandes corporaciones internacionales.

Otra organización que debemos tener en cuenta para asegurarnos la defensa de nuestra soberanía es la OCDE -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-, fundada en 1961. Esa organización es la que está llevando adelante las exigencias sobre transparencia, a través del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, con sus ciento veintiuna jurisdicciones que no representan a los Estados.

Para hacer esas evaluaciones, la OCDE utiliza diferentes criterios: en primer lugar, el marco legal, en lo que refiere a información tributaria, y, en segundo término, la implementación de los estándares. Es en este ámbito que nuestro país, bajo la premisa de una mejor inserción internacional en materia tributaria asumió y está asumiendo compromisos de intercambio de información. No es casual la aprobación de la Ley N° 18.718, de 2010, que permite el levantamiento del secreto bancario cuando se solicite información en el marco de los convenios internacionales vigentes. También debemos tener en cuenta todo lo preceptuado por la Ley N° 18.930, de 2012.

El problema está centrado, fundamentalmente, en la implementación que nos exige el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, sobre todo después de los nuevos modelos de convenios bilaterales de intercambio de información que la OCDE aprobó en julio de 2014. El resultado fue que el intercambio de información es automático, no importa que existan procesos de investigación ni tener acuerdos bilaterales.

Nuestro país adhirió a estas exigencias que debemos cumplir a partir del año 2018. Nuestro grado inversor depende de ese cumplimiento, obviamente, por el hecho de haber adherido.

El Partido Nacional no aceptará que se utilice el tema objeto de esta iniciativa para quedar atrapados en los intereses de los países desarrollados que, por supuesto, se reservan sus paraísos fiscales propios.

El instituto del lavado de activos y todos sus delitos precedentes, objeto del presente proyecto de ley, son valorados desde el punto de vista del interés nacional y no nos colocan en situación de rehenes de intereses que violenten nuestra soberanía.

Uruguay debe enfrentar la próxima evaluación de Gafilat -como ya dijimos, será en 2019- en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. Las "recomendaciones" -entre comillas- pendientes de cumplimiento, "son pocas, pero muy exigentes"; esto también lo dijo el economista Bergara en el Senado.

Asimismo, entendemos que este proyecto de ley se excede en algunos aspectos que no acom-pañaremos.

Votaremos el proyecto en general y prácticamente todos sus artículos, con las excepciones que serán relacionadas y fundadas.

Sin duda, compartimos que es muy importante -y en esto también coincidimos con nuestro colega Asti- tener una ley que compile, integre y actualice toda la normativa relativa a este tema. Por eso es muy relevante esta iniciativa.

Este proyecto tiene como premisa fundamental y general dar rango legal a las disposiciones del Decreto N° 2457/07, porque todo lo que esté previsto a este nivel queda sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, cualquiera sea su signo político. El problema no es el signo político del Ejecutivo; por eso debemos tratar de que estas disposiciones que nos comprometen tanto siempre emanen del Parlamento.

Además de dar rango legal a las disposiciones del decreto -lo que valoramos enormemente-, estamos de acuerdo con que se consagren las remisiones establecidas en el artículo 78 y las derogaciones previstas en el artículo 79, porque dejan en negro sobre blanco cuáles son las normas vigentes en este sentido. Por supuesto, habrá que esperar el decreto reglamentario; el proyecto no tendría que haber establecido siquiera que deja en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación, porque es función de ese Poder reglamentar las leyes.

Nuestras discrepancias comienzan a partir del artículo 13, que refiere a los sujetos obligados no financieros, aspecto en el que se innova especialmente.

—En el literal B) se exceptúan los arrendamientos -las inmobiliarias ya estaban incluidas; eso no nos merece ningún tipo de comentario-, pero comenza-mos a discrepar, sobre todo si nos basamos en lo que dijeron las cátedras y los colectivos profesionales, cuando se involucra a profesionales en los reportes de operación sospechosa.

En el literal C) están contemplados los abogados. A estos profesionales se los incorpora en actividades definidas, y luego de realizadas gestiones pertinentes con el respectivo Colegio y la secretaría antilavado -dejo constancia de que siempre ha sido permeable a las sugerencias de todos los que hemos querido intercambiar, más allá de integrar el Comité Ope-rativo-, queda claro que la obligación refiere, exclusi-vamente, a actividades de gestión, en especial, de sociedades, de representación, etcétera, establecien-do claramente que queda fuera -insisto- el aseso-ramiento y la defensa.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se ruega hacer silencio para escuchar a la oradora y permitir el adecuado registro de la versión taquigráfica.

Puede continuar la señora diputada Bianchi.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- También se agregó que el abogado es sujeto obligado cuando actúa por cuenta del cliente, por cuenta propia y cuando crea sociedades.

No soy quién para decir nada a mis colegas, pero mucha gente que era muy reactiva a los escribanos y, sobre todo, a los abogados, en estos momentos tiene que recurrir a ellos. O sea, es muy bueno que se sepa que esto afecta, según se legisle de una u otra manera, no solo al abogado, sino su relación con el cliente.

El doctor Alberto Varela, especialista en derecho tributario, en ocasión de presentarse ante la Comisión del Senado, el 24 de mayo del corriente, dijo textualmente: "Este proyecto, además de ser inconstitucional, es evitable". No

obstante, nosotros, con las salvedades correspondientes -reitero-, votaremos en general este proyecto.

Esta clara expresión del doctor Varela, en otros términos, es compartida por otros profesionales, como los escribanos públicos, los contadores, los economistas y los administradores, porque se basa en el criterio de "información útil" -que solicito figure entre comillas, porque se trata de una categoría dentro de todo lo que refiere a la inteligencia tributaria y al control de movimiento de capitales-, como motivo exclusivo para el reporte de operaciones. Este es el fundamento que utilizan el Poder Ejecutivo y muchas de las organizaciones internacionales que hemos mencionado. Las hemos citado a estos efectos, hemos dado la fecha de su creación y tratamos de puntualizar brevemente algunas de sus competencias. Esto debe tenerse especialmente en cuenta porque no afecta solo a los colectivos de profesionales.

"Información útil" es un concepto muy difuso: toda información puede ser útil, pero en el Uruguay los profesionales liberales se agrupan en asociaciones o colegios de afiliación voluntaria, no obligatoria, lo que les da una laxitud muy peligrosa. Por ello, es importante considerar el concepto de "información útil" como motivo exclusivo para el reporte de operaciones.

Hasta este proyecto, el énfasis de las obligaciones estaba puesto en los agentes económicos con participación e intermediación en operaciones comerciales concretas y con sustento financiero concreto. En esta iniciativa se profundiza lo que acabamos de decir: la "información útil" en agentes que no tienen la infraestructura ni las posibilidades de hacer trabajos prácticamente de investigación.

El Partido Nacional no acompañará este numeral, dejando explicitado que, por más que se haya ajustado la redacción -aclaramos que se hizo caso al Colegio de Abogados del Uruguay para mejorar un poco la redacción-, se afecta potencialmente el secreto profesional, es decir, la confidencialidad entre abogado y cliente. El abogado cumple un rol fundamental en el Estado de derecho, por cuanto cuando asesora, aconseja y defiende está fuera de los hechos. Si el abogado colabora en el armado de una operación de lavado de dinero, es coautor del delito, lo que ya está previsto.

Asimismo, se obliga a estos profesionales del derecho a ser verdaderos investigadores del cliente -sobre cómo vive, de dónde surge el dinero- y no lo pueden poner sobre aviso al cliente, porque se violaría el artículo 21.

También se afecta el derecho al trabajo consagrado en el artículo 36 de la Constitución de la República. Sobre todo en los últimos años, se ha instalado en la sociedad uruguaya la idea de que quienes trabajamos con la cabeza, porque somos profesionales universitarios, no trabajamos. Pero nosotros también tenemos derecho al trabajo.

El literal D) contempla la situación de los escribanos, que ya eran sujetos obligados, y cualquier otra persona física o jurídica, cuando participen en determinadas operaciones para sus clientes, siempre -reitero- dejando fuera el asesoramiento.

Sí se agrega en la presente norma -está bien; no nos oponemos, pero está en el mismo numeral- la obligación de los escribanos de intervenir en la

enajenación de bienes inmuebles, promesas de enajenación y cesiones de establecimientos comerciales, las intervenciones por cuenta del cliente en cualquier operación financiera inmobiliaria y toda las actividades de prestación de servicios societarios del literal H).

Los escribanos, a través de su Asociación -nosotros los respaldamos- consideran que este proyecto de ley no es lo suficientemente claro a los efectos de preservar la integridad de un profesional, único depositario de fe pública.

La mayor objeción que realizan estos profesionales, y que nosotros compartimos, es que se los trata igual que a los sujetos financieros, especialmente los bancos, que tienen otro tipo de infraestructura material y de recursos humanos. Todos quienes realizamos cursos a lo largo de los últimos años sobre la prevención del lavado de activos y la financiación de terrorismo sabemos que están enfocados, fundamentalmente, a los oficiales de cumplimiento de los bancos, que tienen que hacer un trabajo de investigación en verdad enorme. Están para eso, se les paga para eso; tienen un estatuto especial y, además, toda la infraestructura que corresponde a lo material y lo humano y, obviamente, la mayoría de los profesionales -escribanos, abogados y contadores- realizan el ejercicio liberal de la profesión.

Los escribanos también se oponen a una función de tipo policial y de investigación que, además, trae aparejado el riesgo personal. Doy fe de esto, señor presidente. Cuando yo ejercía la profesión tuve que hacer un reporte de operación sospechosa. Fui de las primeras; no se lo deseo a nadie, porque el tema de la confidencialidad o del secreto en Uruguay es muy difícil por el propio tamaño del país.

Por otra parte, el Partido Nacional entiende que en un régimen obligatorio de bancarización, en la operativa de negocios en que participa un escribano, es preceptiva la intervención de un banco. En consecuencia, estamos agregando a los profesionales y escribanos públicos un control que ya realizó el banco, con lo que ya dijimos que tienen a favor los bancos: disponibilidad de personal especializado.

En el literal J) están incluidos los contadores públicos en lo que refiere a la confección de informes de revisión limitada de estados contables y la confección de informes de auditoría de informes contables. Para el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores este es un camino "peligroso y preocupante", tal como manifestó el presidente del Colegio, contador Zak, al concurrir a nuestra Comisión el 5 de octubre de este año. Estos profesionales entienden que excede la labor del contador, corriendo los límites en forma excesiva su obligación de control, lo que afecta a su función y a sus clientes. El contador Félix Abadi, catedrático de impuestos de la ORT y actual presidente del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, establece claramente: "[...] hay una verdadera posibilidad de autoincriminación de la persona [...]". El mismo profesional consigna que se consagra una delegación de obligaciones en la medida en que el rol de fiscalización y contralor lo debe llevar el Estado. A todos los profesionales referidos *ut supra* se les considera sujetos obligados, no ante la inminencia de una operación comercial y de flujo financiero sino de acceso a la información, que se hace de acuerdo con los principios del secreto profesional de rango constitucional.

¿Por qué los colegios y asociaciones profesionales consideran el criterio de "información útil" como peligroso? Porque no tiene límites, señor presidente. Este criterio de utilidad le da un enorme poder a la Administración sobre la actividad de los profesionales y la protección de los derechos de los clientes, o sea, personas que no son abogados, escribanos, contadores, administradores y demás.

El Partido Nacional no acompañará el proyecto en estos numerales del artículo 13 porque, además de las consideraciones de los profesionales antes referidos, países más avanzados en la materia no tienen esta obligación. Tomamos como ejemplo Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Israel y Canadá.

Queremos dejar constancia de que en el acápite de los numerales correspondientes a los abogados, contadores y escribanos se decía lo mismo. Probablemente, sea un error de redacción. Si yo hubiera podido estar en la Comisión cuando se terminó de aprobar el proyecto, habría sugerido esta corrección; por eso la hago en sala. No existe ninguna razón por la cual -al menos, por las actividades en las cuales hay coincidencia- en un caso se dice que actúen "por cuenta y orden" y en los otros no, sobre todo teniendo en cuenta que siempre se excluye la actividad de asesoramiento. Las actividades de cualquier profesional son básicamente de dos formas: por cuenta y orden o en asesoramiento. Si se incluye la de asesoramiento, tiene que estar la de cuenta y orden. Entendemos que debe corregirse la redacción.

El artículo 20 también es motivo de preocupación al incorporar el concepto de "persona políticamente expuesta" prevista por la normativa del Banco Central desde 1997 por el Decreto N° 355, de diciembre de 2010, para el sector no financiero. No acompañaremos la modificación del artículo 20, porque mantiene una redacción difusa que da a los sistemas de control públicos y privados...

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Ha culminado su tiempo, señora diputada.

Tiene la palabra el señor diputado Juan José Olaizola.

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Señor presidente...

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Sí, señora diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir la señora diputada.

SEÑOR BIANCHI POLI (Graciela).- Como decía, señor presidente, no acompañaremos la modificación del artículo 20 porque mantiene una información difusa, que da a los sistemas de control públicos y privados -los bancos terminan incidiendo en la vida de los particulares- mayores facultades que las que deben tener.

¿Qué significa la expresión "políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía o dirigentes destacados de partidos políticos"? El Partido Nacional no acompañará esta redacción porque estamos exponiendo a las más altas autoridades nacionales, inclusive

legislativas, que representan nada menos que el poder ciudadano, sin un límite jurídico claro.

En la sesión de la Comisión respectiva de la Cámara, del día 21 de setiembre del corriente, en la que fue recibida la Secretaría Nacional, el diputado Alfredo Asti expresó lo siguiente: "Coincido en que la redacción no es feliz: hay que poner a los funcionarios del Poder Legislativo. Se habla de gubernamentales y, sí, nosotros ejercemos el Gobierno junto con el Poder Ejecutivo, pero, específicamente, se habla de judiciales y militares. Estoy de acuerdo en que acá, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Asamblea General -más allá de que sea el vicepresidente- son de jerarquía en este órgano, pero los demás somos todos igualitos; creo que podríamos hasta tratar de escaparnos, y no es feliz".

Entendemos que este artículo debe ser modif.-cado en su totalidad, ya que abre las puertas absolutamente a quien lo interprete, poniendo en riesgo no solamente el prestigio personal sino de las instituciones, error que la sociedad uruguaya no puede volver a cometer. La enumeración de funcionarios y los familiares considerados PEP debe ser taxativa, sin lugar a interpretaciones. Siempre está la Justicia para facilitar la información en caso de ser necesario.

Este es un ejemplo en que el Uruguay puede y debe establecer sus propias normas. El contador Espinosa -nada menos que el Secretario Nacional de Antilavado, persona que merece nuestro máximo respeto y apertura de todo tipo porque realmente es un profesional a destacar-, en la sesión referida *ut supra*, dijo lo siguiente: "Este es uno de los conceptos más criticados a nivel mundial. Esto surgió a raíz de casos como el de Salinas de Gortari, el presidente de México, y su hermano, que tenían cien millones de dólares en Suiza, y de presidentes africanos que también aparecían. Entonces, inicialmente, se quiso recoger esto y decir: 'es un elemento de riesgo, hay que considerarlo' y se lo puso genérico, porque, inclusive, se habla de allegados y, probablemente, el allegado sea el testaferro del político. O sea, es un concepto inasible, y cada vez que hablamos con los bancos, con los escribanos, etcétera, nos recriminan eso. El tema es que es un estándar internacional; nosotros acá tratamos de recogerlo como viene, esto es prácticamente la versión traducida de Gafilat".

El Uruguay tiene una lista de cargos, se supone que taxativa, en el Banco Central, que figura en su página web; lo que corresponde es que tenga rango legal. El Banco Central es una cosa, Gafilat es otra, la UIAF es otra, por más que se complementen pero, en Uruguay, la libertad, el honor y la privacidad de las personas están preservados por la Constitución de la República. De más está aclarar que en nuestro país ningún tratado internacional tiene más valor que la Constitución de la República, porque cuando nosotros los ratificamos los incorporamos al sistema legal. Es una ley más, que está por debajo de la Constitución de la República. Hay países que tienen otro tipo de organización.

Tenemos otra discrepancia importante con el artículo 27, que refiere al intercambio de información con autoridades homólogas de otros Estados, lo que ya estaba contemplado en el artículo 7º de la Ley N° 17.837. En este proyecto de ley se agrega que la UIAF tendrá la facultad de autorizar a la autoridad requirente a compartir la información suministrada con otros organismos encargados de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento

del terrorismo en el país para ser utilizada con fines de inteligencia. Lo que está en juego, que nuestro país puede y debe resolver de una manera mucho más segura, es que medie autorización judicial, que la autorización para completar la investigación surja de un acto concreto y breve que se podrá legislar, pero judicializado. Lo mismo es aplicable al intercambio de información con autoridades nacionales.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar el señor diputado Juan José Olaizola.

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Señor presidente...

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- ¿Me permite otra interrupción?

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Sí, señora diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: el Uruguay tiene un férreo secreto tributario que no perfora siquiera la Ley N° 18.381, de octubre de 2008, de acceso a la información pública. La única seguridad que tenemos, aunque es una dificultad, es que la Justicia puede solicitar el levantamiento del secreto tributario y determinados usuarios la UIAF y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Senaclaft, está haciendo inspecciones diarias en estudios de profesionales que ejercen en forma liberal, y la verdad es que nos da la mayor garantía, pero de la administración.

Si bien este artículo está previsto para las investigaciones que realice la UIAF y para la cooperación de otros organismos, en la medida en que las pesquisas secretas están prohibidas en el artículo 22 de la Constitución de la República insistimos en la intervención judicial.

Es precisamente en el Capítulo III donde están plasmadas todas las normas de cooperación internacional por la vía administrativa, basadas en la Recomendación N° 40 de GAFI. Pero nos preguntamos si los uruguayos no somos capaces de redactar una norma que logre, en brevísimo plazo, la autorización judicial, previa notificación a la Fiscalía General. Esta fue una posibilidad que, inclusive, manejó el contador Espinosa, la comunicación a la Fiscalía General, pero seguiríamos manteniéndonos en el ámbito, no digo totalmente administrativo, pero bastante cercano.

En el Capítulo V, Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, desde el artículo 30 al 42 se tipifican y también se establecen las penas. En los artículos 30 y 31, que se refieren a "conversión y transferencia" y "posesión y tenencia" respectivamente, se establecen penas de hasta quince años de penitenciaría, con un mínimo de dos. No hay ninguna duda de que son delitos graves, pero simplemente queremos dejar consignado que se establecen penas más altas que las del artículo 310 de nuestro Código Penal para el homicidio simple. Lo mismo sucede en el caso del numeral 20 del artículo 34, donde también se establecen todos los delitos precedentes de lavado de activos en sus diversas modalidades.

El Partido Nacional no comparte el criterio de excluir de estos delitos el enriquecimiento ilícito. Creemos que es urgente considerarlo, dada la realidad de corrupción existente, especialmente en nuestro continente. Según el presidente de la Jutep, contador Díaz Iribarne -de quien también reconozco su excelente labor y su trabajo en el Comité Operativo-, en declaraciones realizadas a la prensa la semana pasada, en el Uruguay hay mucha corrupción. Fue planteado por nuestros representantes en los grupos de trabajo, pero no fue recogido. Insistimos en su incorporación.

El Partido Nacional considera inconveniente -en consecuencia, no lo votará- la incorporación de defraudación tributaria como delito precedente. Desde 2012, el GAFI lo incluye como una sugerencia y no habla de defraudación tributaria, sino de delito fiscal. En el proyecto se lo asocia con la defraudación tributaria. En los convenios de cooperación penal internacional, la materia tributaria está excluida. Este es uno de los límites en que Uruguay tiene margen para decidir. La razón de la exclusión se basa en dos argumentos. Uno es que el instrumento fiscal ha sido utilizado para persecuciones políticas; el otro es que lo anterior es posible por la gran incertidumbre que tiene la materia tributaria.

Nuevamente citaremos la calificada opinión del ya nombrado contador Félix Abadi, relator por Uruguay en ámbitos internacionales: "Por lo tanto, la idea importada de incluir a la defraudación tributaria como delito precedente nos va a traer dolores de cabeza, como a muchos países. En Argentina, en las moratorias, tienen que tomar la previsión de excluir la causal de lavado de activos por el delito de defraudación tributaria. Claro, en el mismo momento en que un contribuyente acepta una reliquidación o en que se presente a decir: 'Yo declaré o subdeclaré', de alguna forma, está admitiendo un delito de defraudación que sería automáticamente precedente de lavado de activos".

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar el señor diputado Juan José Olaizola.

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Señor presidente...

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- ¿Me permite otra interrupción?

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Sí, señora diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: el Partido Nacional no acompañará este numeral del artículo 34.

Los artículos 35 y 36 son, efectivamente, muy cuestionables desde el punto de vista jurídico y refieren al autolavado y al delito de lavado de activos autónomo. Este último está en los estándares internacionales; en cambio, el primero, o sea el autolavado, queda a criterio del país. Es otro aspecto que el país puede decidir no incluir. En el proyecto de ley a estudio se ha optado por consagrar el autolavado, y nosotros no lo compartimos.

El contador Espinosa manifestó en forma definitiva en la Comisión que para el Gobierno uruguayo, tomando como referencia la evaluación que se nos realizará en el 2019 "[...] el delito autónomo es innegociable. Esto está

clarísimo en la base del sistema de prevención. Tenemos que saber que si esto no está, vamos a tener una observación desde el punto de vista de la tipificación del delito".

La academia nacional e internacional está dividida en este tema. Como nosotros tenemos una excelente cátedra de Derecho Penal, recogeremos la opinión del doctor Aller, que no solamente es integrante del Colegio de Abogados del Uruguay, sino el director del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Udelar. En ocasión de concurrir a la Comisión respectiva del Senado el 24 de mayo del corriente, dijo lo siguiente: "El artículo 34 es realmente inadmisibile. Propone el delito de autolavado. Es un dislate jurídico. En la Facultad de Derecho, si un estudiante en un examen de derecho penal plantease esto, desde ya, advierto que perdería el examen, no seguiríamos interrogándolo. Es lo que entendemos como agotamiento en el proceso de ejecución del delito o *iter criminis*. No puede existir el autolavado, sí el lavado respecto de terceras personas, que equivale a un delito de receptación o, eventualmente, de encubrimiento, pero no puede hacerlo el mismo individuo porque está cumpliendo la finalidad, que es la intención ajustada al resultado".

El doctor Aller pone como ejemplo una situación habitual y sencilla: una persona que hurta una radio de automóvil para venderla y con lo que obtiene compra bienes, cosa que en el Uruguay ya ni denunciamos. Cuando adopta esta conducta agota el delito. El delito se consuma cuando sustrae con apoderamiento, pero lo agota en el momento que logra el fin, que es hacerse del dinero para comprar bienes. Con estas normas jurídicas debemos tener mucho cuidado, porque las que copiamos, las que nos imponen o las que nos sugieren provienen de los países dominantes, de los países de fuente anglosajona, que funcionan en forma totalmente distinta. Nuestro derecho es de base latina; no podemos imputar a esta persona el delito de hurto más el del lavado de dinero. El que lava el dinero puede ser el que recibe el bien, lo transfiere y lo vende, pero jamás el que haya llevado a cabo el hurto. El Partido Nacional no va a acompañar este artículo.

El artículo 35 consagra un delito autónomo de lavado, independientemente del delito precedente, ya que no requiere que haya procesamiento por un delito previo. Lo que la cátedra de Derecho Penal, a través del doctor Aller, trasmite a los legisladores -reitero: a los legisladores- es lo siguiente: ¿cómo se puede condenar por lavado de dinero de algo que no se sabe si es ilícito? Por supuesto que no puede existir la posibilidad de lavado si no hay delito precedente con sentencia firme. Esto nos tocó plantearlo y discutirlo con mucho respeto con el licenciado Díaz, e inclusive con el contador Espinosa en el comité operativo, porque yo estaba en ese subgrupo. El Partido Nacional tampoco acompañará este artículo porque se vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia y los principios penales de culpabilidad, tipicidad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las penas.

En este artículo también tenemos un problema con la prueba. ¿Alcanza la convicción suficiente establecida en el artículo 37? ¿Basta la sola convicción del juez sin prueba para aceptar que se cometió un delito en el país o en el extranjero? No olvidemos que se está habilitando, no obstante ello, el procesamiento por lavado de activos.

El artículo 53 de este proyecto tiene los mismos defectos jurídicos expuestos *ut supra*, relativos al decomiso de bienes. El Partido Nacional no lo acompañará por las razones expuestas.

En los artículos 63 y 64 del Capítulo VIII, se copian dos figuras de base jurídica anglosajona.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor diputado Olaizola.

Tiene la palabra la señora diputada Mabel Quintela.

SEÑORA QUINTELA (Mabel).- Señor presidente...

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA QUINTELA (Mabel).- Sí, señora diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir la señora diputada.

SEÑOR BIANCHI POLI (Graciela).- Muchas gracias. Me falta muy poquito; no aburro más, pero creo que estas son cosas que debemos tener en cuenta y no pasar este tema muy rápido. Todos entendemos el problema que tenemos frente a las organizaciones internacionales, pero que se pase por encima de nuestra soberanía, depende de nosotros.

Decía que en los artículos 63 y 64 del Capítulo VIII, se copian dos figuras de base jurídica anglosajona, que son respectivamente el colaborador y el agente encubierto. En nuestro derecho estas figuras, así definidas, nos generan varios problemas. Para el Instituto de Derecho Penal -no para la diputada Bianchi, ni para los diputados del Partido Nacional-, es una conducta "deplorable" -entre comillas-, porque es la mejor manera de lavar dinero: una persona colabora para aclarar el hecho, lo hace, lo planifica, delata a los demás y se puede quedar con todo el producido.

En el artículo 64 se incorpora la figura del agente encubierto. En este caso, y siguiendo la doctrina uruguaya, en principio podríamos votarlo. Pero debe modificarse la redacción en cuanto a que no quede autorizado a cometer ciertos delitos. Adviértase que siempre serían graves los delitos que se autorizaría a cometer a estos funcionarios públicos. El doctor Aller pone el ejemplo claro de imaginarse a un funcionario policial a quien autorizáramos a cometer delitos. Esto implicaría que debería comunicárselo a la banda que va a integrar porque, de lo contrario, tendría que renunciar a su función de policía. O sea que esto exige una redacción que lo corrija; no tenemos una oposición de fondo con esta figura, pero de alguna manera la persona tiene que ser defendida jurídicamente porque está cometiendo delitos y es funcionario público.

Todo lo anterior es consecuencia de lo referido *ut supra*, en el sentido de que la base de las figuras que estamos copiando es anglosajona. De cualquier manera hay antecedentes jurisprudenciales en Canadá, donde el colegio de abogados interpuso recurso de inconstitucionalidad -adviértase que no es solamente una moda uruguaya- ante la Corte Suprema, sobre una legislación igual, impuesta por el GAFI. Dicha Corte, en sentencia que quedó firme, resolvió que se habían afectado los principios de proporcionalidad y de razonabilidad, incluso cuando se tratara del combate al narcotráfico. Dice la

Corte Suprema de Canadá que, no obstante estar ante un delito gravísimo como este -o sea, el narcotráfico-, se consideró que es más importante la protección de los derechos individuales y las garantías.

La Corte Suprema de Canadá sostuvo también algo muy importante: si se quiere tener resultados en delitos graves y sofisticados, se necesita ser más preciso y no usar los excesos para lograr los objetivos. En verdad, con el poco éxito que estamos teniendo, tanto nosotros como la comunidad internacional, en la persecución de delitos graves y gravísimos, parecería que los que usan lo que dice la Corte de Canadá, y lo sofisticado, son los delincuentes. El Partido Nacional no acompañará estos dos artículos, por las razones expresadas.

Finalizo, señor presidente. Esto es poner una pica en Flandes desde el punto de vista conceptual en el tratamiento del proyecto de ley que estamos abordando. Reitero que me sentí sumamente cómoda cuando lo redactamos y muy respetada cuando expusimos nuestras discrepancias. Este es un claro ejemplo de lo que debería ser el Uruguay siempre: reunirnos todos los partidos políticos, con sus técnicos, y llegar a acuerdos que establezcan políticas de Estado o políticas nacionales.

Un país como Uruguay, de fuerte tradición republicana y defensa del Estado de derecho, de su Estado de derecho, debe negociar con firmeza. La colaboración internacional para los delitos establecidos en el presente proyecto de ley debe hacerse sin menoscabar nuestra soberanía y los derechos de los habitantes.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar la señora diputada Mabel Quintela.

SEÑORA QUINTELA (Mabel).- No voy a hacer uso de la palabra, señor presidente.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: quisiera hacer una aclaración y contestar una alusión, porque en algún momento se dijo que aceptar recomendaciones de organismos internacionales, que integramos -esto lo aclaré-, e inclusive llegamos a presidir, era una violación de la soberanía.

Uruguay se ha dado mecanismos con relación a este tema, entre ellos el grupo de trabajo al que hicimos mención en nuestro informe y al que también hacía referencia la diputada preopinante, que muy bien dirigió durante mucho tiempo el querido compañero licenciado Carlos Díaz, logrando un ámbito de trabajo en el cual estaba la disposición de integrantes de los tres Poderes para llevar adelante la actualización de esta norma, no solamente porque tenemos compromisos internacionales sino porque es una política que creemos es de Estado: la lucha contra este flagelo internacional. Entendemos que no hay ninguna cesión de soberanía en este sentido.

Estamos acompañando estas recomendaciones porque, además, queremos tener herramientas para luchar contra estos problemas y, en particular, nos interesa todo lo que tiene que ver con la transparencia.

En este Parlamento tuvimos diferencias cuando votamos el tema de la transparencia fiscal internacional y las medidas para combatir algunas prácticas en su contra. En ese sentido, en el pasado Uruguay se caracterizó por la opacidad; nosotros, como gobierno, y en particular como legisladores, optamos por la transparencia y no por la opacidad.

En cuanto a las recomendaciones, se hacía referencia a que en la evaluación actual la mayor parte de las recomendaciones han sido cumplidas y hay dos sin cumplir o, mejor dicho, están parcialmente cumplidas. Pero eso es con respecto a la evaluación de las recomendaciones anteriores, no de las nuevas. Las nuevas recomendaciones que ha emitido el GAFI nos obligan y nosotros queremos cumplirlas; con ello tendremos una nueva evaluación en 2019. Para que esa evaluación sea positiva -nos interesa estar bien para que nos evalúen bien, porque queremos tener las herramientas para combatir estos delitos- es necesaria esta normativa.

Con respecto al autolavado y al lavado de activos como delito autónomo -artículos 35 y 36-, obviamente no soy experto en derecho, pero por supuesto que para nosotros es de fundamental importancia, como se ha dicho, considerar el autolavado. ¿Qué quiere decir esto? Que además de cometer los delitos, si se violan los artículos 30 a 33 de este proyecto de ley, puede existir esa doble incriminación por los delitos precedentes y por los de lavado, si se cumplen los preceptos previstos en los mencionados artículos.

En cuanto al delito autónomo, nos extendimos bastante en el informe inicial. Tenemos que dejar claro, para quienes no lo entendieron, que lo que decimos es que el delito de lavado, por ser un delito autónomo, no requerirá del auto de procesamiento del delito previo, del delito precedente, pero todo esto sí requerirá, por supuesto con todas las garantías del debido proceso, el pronunciamiento judicial sobre el delito de lavado de activos. Esto es fundamental para cortar esa relación entre los delitos precedentes y los bienes que ellos produjeron.

Por supuesto, como dijimos en nuestro informe, tendríamos alguna diferencia. Se leyó pícaramente una de las diferencias que tendríamos, pero no es un obstáculo para la aprobación de todo el articulado.

Seguramente, con la reglamentación -de la misma manera que con la reglamentación se podrán eliminar dudas, como quedó claro en la Comisión, con la comparecencia de las autoridades de la Secretaría y de los sujetos obligados- se podrá diferenciar a los sujetos obligados que tengan carácter de sujetos financieros o no financieros, como establecen los artículos 13 y 33. Sí hay algunas diferencias. Si el tiempo alcanza, podemos dejarlas mencionadas para que luego, en la reglamentación o en posteriores modificaciones o adaptaciones a otra normativa, como todo lo que tiene que ver con el nuevo Código del Proceso Penal, se pueda avanzar en ellas.

—Lo fundamental es aprobar este proyecto de ley y declarar que este Parlamento apoya la iniciativa de luchar contra todo lo que tiene que ver con este tipo de delitos. Por lo tanto, acompañaremos sin temor este articulado.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: en realidad, pedí la palabra para hacer una aclaración, para contestar una alusión... En fin, es temprano todavía...

Con todo el respeto que tengo por el señor diputado Alfredo Asti, quiero decir que mencionar todo lo que se trabaja en una Comisión, que está registrado en la versión taquigráfica y colgado en la página *web* del Parlamento, no constituye una picardía. No estoy vulnerando ninguna conversación privada relativa a este tema mantenida con el señor diputado Asti. Tanto con él como con el contador Daniel Espinosa, y ni qué hablar cuando estaba Carlos Díaz, tuvimos conversaciones telefónicas en forma sistemática, porque las consultas y los acuerdos así lo requerían y, reitero, se sigue manteniendo ese criterio. Lo mismo ocurrió con Gil Iribarne, a pesar de que ahora está al frente de la Jutep. Todo forma parte de los mismos controles. No lo interpreten como una vulneración de una conversación, porque no fue privada, sino que figura en la versión taquigráfica de las sesiones de la Comisión. Lo digo con toda honestidad. Me llama la atención que se haya tomado así. Además, no fue una picardía. No soy pícara; soy bastante más fuerte cuando quiero decir las cosas, pero jamás vulneraré una conversación privada.

No van a poner al Partido Nacional en la postura de que estamos a favor de la opacidad. ¡No lo voy a permitir! Lo dije y lo repetí hasta el cansancio: vamos a acompañar todo el proyecto. Inclusive, acompañaremos algunos artículos a los que yo me opuse. En realidad, mis compañeros me dijeron: "¿Te parece?". Bueno, vamos a hacerlo porque es una política de Estado. Se trabajó para que fuera una política de Estado y hay un reconocimiento en ese sentido. No me gustaría que ese criterio se quebrara donde nos tenemos que poner de acuerdo.

En cuanto a la opacidad del sistema financiero, el que hubiera sido gobierno en ese momento habría tenido la misma política, porque era lo que primaba en el mundo. ¿O nosotros tenemos una política de cuño nacional? No me hagan hablar ni meterme en esas cosas, porque quebraríamos esta cosa de política nacional que uno quiere tener en cuenta.

Obviamente, queremos colaborar en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. No quiero profundizar, pero no es el Partido Nacional el que se ha relacionado con países que tienen vínculos con el terrorismo y hasta acá voy a llegar. Pero si me dicen una cosa grave, advierto que voy a contestar hasta donde se mantenga este clima que corresponde; podemos seguir...

Las recomendaciones del GAFI estuvieron en las palabras del economista Mario Bergara. Se puede recurrir a la versión taquigráfica del Senado. Reivindico a la Cámara de Diputados. La reivindico, para los que nos mandan a tapas cerradas los artículos, como si fuéramos la escribanía de gobierno del Senado. ¡Menos mal que en la Cámara de Diputados está esta Comisión! Mario Bergara lo dijo ahí. ¡Él habló de esas recomendaciones! ¡No fui yo!

A mí no me tranquiliza nada que se deje todo librado a la reglamentación, porque la reglamentación la hace el Poder Ejecutivo. ¿Desconfío del Poder Ejecutivo? Miren, no voy a decir si desconfío o no. Más o menos puede pensarse que en algunos ámbitos sí, pero la reglamentación tiene que estar de acuerdo con la ley, o sea que más vale resolver el problema en la ley, si hay que resolverlo, y no dejarlo librado a la reglamentación. De lo contrario, después se ataca el reglamento porque va en contra de la ley. Ese es un error que sistemáticamente se ha cometido en estos últimos años: se cree que con la reglamentación se puede modificar una ley, y eso nos ha llevado a muchos problemas con la Suprema Corte de Justicia.

Muchas gracias, señor presidente.

14.- Lavado de activos. (Actualización de la normativa vigente)

—Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Ope Pasquet.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: ante todo quiero dejar constancia de que hablaré a título personal. No representé al Partido Colorado en la Comisión que estudió este tema. Leí el repartido respectivo en el tiempo de que dispusimos al efecto y formularé mis consideraciones a título, reitero, exclusivamente personal.

Estoy dispuesto a acompañar en general el proyecto de ley, y así lo haré, por las razones que expuso en su momento el miembro informante, señor diputado Alfredo Asti, que son las razones por las cuales el Senado lo aprobó. Sin perjuicio de ello, tengo reparos en cuanto a algunos artículos, a algunas soluciones. Cuando llegue el momento votaré negativamente esos artículos.

Empiezo por señalar que, como manifestó el miembro informante, esto responde a un criterio que cunde a nivel internacional, de crear instrumentos que permitan la lucha contra el lavado de activos y la financiación, se ha dicho, del terrorismo y de las armas de destrucción masiva. Basta decirlo para que quede claro que esto no surge de la necesidad de responder a problemas específicos del Uruguay. En la actualidad no tenemos problemas de terrorismo. Antes, quizás, pero hoy no. Y, felizmente, tampoco tenemos que lidiar con armas de destrucción masiva.

Entonces, estamos respondiendo a una exigencia internacional, y me parece que, en el afán de responder cumplidamente a esa exigencia y no merecer observaciones ni que se nos incluya en lista negra o gris alguna, hemos aceptado la configuración de una especie de zona franca institucional, en la que no rigen principios ni reglas, que son los del derecho común. En lo que tiene que ver con este tema, no rigen, no se aplican. Por eso digo que es una especie de zona franca institucional. Respecto de esto yo sí tengo varios reparos.

En primer lugar, y voy a la parte orgánica del proyecto, a partir del artículo 4º y hasta el 8º, se crea una Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, a la cual se le otorgan una serie de atribuciones y competencias muy importantes.

Estoy en contra de la creación de la secretaría en la órbita de la Presidencia de la República por las mismas razones que reiteradamente, en los últimos años, me he opuesto a la creación de otras secretarías. Hemos dicho y repetido sin que nadie haya podido demostrarnos que estamos equivocados, que la Presidencia de la República es un órgano de competencia cerrada, es decir, tiene las competencias que le atribuye la Constitución y no se puede por ley, asignarle otras, que es el vicio en el que se recae cuando se crean estas secretarías en su órbita.

Más allá de contrariar el sistema constitucional, se advierte las consecuencias políticas de esto: no hay ministro responsable ante el Parlamento; no hay a quién pedir informes. Cuando se han creado otras secretarías -no recuerdo si fue la del deporte, la de medio ambiente u otras -, se tuvo la delicadeza de decir que responderá por ellas determinado ministro ante el Parlamento. En este proyecto de ley no encontré una norma que diga qué ministro va a venir a rendir cuentas o a contestar los informes que creamos del caso solicitar a la secretaría que va a tener competencias tan importantes. Con esto me alcanza para no votar toda la parte orgánica del proyecto de ley en consideración.

Además de toda esta cuestión, digamos de principio, advierto que se otorga a esta secretaría competencias realmente muy importantes. Por ejemplo, en el literal E), numeral 1) del artículo 4º, en el que se establecen las atribuciones, se le da competencia para: "Exigir a los sujetos obligados y a todos aquellos sujetos que hayan tenido participación directa o indirecta en la transacción o negocio que se esté fiscalizando o investigando la exhibición de todo tipo de documentos, propios o ajenos, y requerir su comparecencia ante la autoridad administrativa para proporcionar la información que esta solicite".

Quiere decir que este secretario, dependiente de la Presidencia de la República, ni siquiera del Poder Ejecutivo, va a poder llamar a cualquier ciudadano o habitante de la República, a cualquier particular, para exigirle la presentación de documentación propia o ajena. No se hace ninguna salvedad o restricción para amparar, por ejemplo, el secreto profesional. Llamen a cualquiera y le dicen: "Presénteme la documentación que tenga, la suya o la de terceros que esté en su poder", y hay que cumplir con esto. Y se puede exigir, además, que comparezca personalmente. ¡Miren las atribuciones de este secretario!

Después, en el mismo literal, se dice que podrá practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles. Son facultades de investigación que, en principio, parecen propias de la Fiscalía General de la Nación. Si hay que hacer investigaciones, el Estado uruguayo tiene el órgano para hacerlo, la Fiscalía General con todas sus dependencias, pero esto de tener en la Presidencia de la República un órgano que va a poder investigar de esta manera, me parece claramente un exceso no justificado. Esto podrá responder al modelo constitucional de otros países en los que la Presidencia de la República tiene agencias, oficinas o secretarías con amplísimos poderes que hacen y deshacen a su antojo, pero con nuestra Constitución, esto así me parece que no se puede hacer y que no se debe hacer.

Además, esta secretaría tiene otras atribuciones: el titular es designado directamente por el Presidente sin venia del Senado ni acuerdo de ningún tipo; es una designación directa. Asimismo, se le asignan competencias que son propias del Poder Ejecutivo actuando con el Ministerio de Relaciones Exteriores; porque se dice que esta secretaría podrá suscribir convenios con entidades nacionales e internacionales para el cumplimiento de sus cometidos, a cuyo efecto recabará previamente la conformidad de la Presidencia de la República, no del Poder Ejecutivo. Es decir que la Cancillería se enterará leyendo la página de Presidencia, si es que se entera, pero estamos creando toda una porción del relacionamiento internacional del país que no pasa por la Cancillería y, por lo tanto, por el Poder Ejecutivo, que lo resuelve esta secretaría que suscribe sus convenios y, en algún caso, solicita la conformidad de la Presidencia de la República, según dice el texto.

En el literal G) del artículo 5º, se establece que este mismo secretario asumirá la representación del país ante todos los organismos especializados y eventos nacionales e internacionales en la materia. Entonces, se refuerza la misma idea, es decir, se recorta una porción de la competencia natural del Poder Ejecutivo en materia de relaciones internacionales, competencia que se desempeña mediante el acuerdo del Presidente con el Canciller, y se le confía a este secretario nacional antilavado. Realmente esta es una salida del derecho común muy fuerte.

Hay otras normas en otros capítulos que también generan nuestra preocupación, además de lo que señaló en su estupenda exposición la señora diputada Bianchi, cuyos fundamentos compartimos.

Voy a hacer una observación general. Me parece que todo esto se redactó cuando todavía regía el antiguo Código del Proceso Penal. Este proyecto no toma en cuenta la innovación radical que introdujo el nuevo Código del Proceso Penal. Por ejemplo, en el artículo 43 del capítulo relativo a las medidas cautelares, se establece: "El tribunal penal competente adoptará por resolución fundada, de oficio o a solicitud de parte [...] las medidas cautelares [...]", que allí se señalan. Esto de que el tribunal adopte medidas cautelares de oficio, no es conciliable con el actual Código del Proceso Penal por el que todas las medidas cautelares deben tomarse a iniciativa del ministerio público. Si no hay tal iniciativa, no se pueden tomar. Todo este capítulo tiene ese vicio: está redactado como si los tribunales penales actuales fueran los mismos que existían antes del 1º de noviembre de este año y ya no lo son, es decir, no pueden actuar de oficio para adoptar medidas cautelares ni para modificarlas ni para dejarlas sin efecto. Eso es de resorte del ministerio público que es el que debe pedirlo, o de la parte, en su caso. Insisto en que el tribunal no puede actuar de oficio en esta materia.

Tampoco puede hacerlo el tribunal -cuando digo tribunal me refiero genéricamente a los juzgados y tribunales con competencia en materia penal-, no puede investigar. La clave, el concepto central del nuevo Código del Proceso Penal es que la investigación corre por cuenta del ministerio público y el juez y el tribunal están por encima de las partes de la acusación y de la defensa. Su función consiste en juzgar, no en investigar. Sobre esto se ha insistido hasta el hartazgo; es la médula de la reforma. Pues bien: en el artículo 41 se regula una especie de lo que se llama investigación económico-financiera paralela, y dice lo

siguiente: "Siempre que se inicie una investigación por cualesquiera de las actividades delictivas precedentes señaladas en el artículo 34 de la presente ley, el tribunal penal competente, consideradas las circunstancias del caso, deberá realizar una investigación económico-financiera en forma paralela, [...]". Esto choca frontalmente con el nuevo Código del Proceso Penal porque los tribunales no investigan; investiga el ministerio público. Esta es una incongruencia fenomenal con el nuevo sistema procesal penal que tiene la República.

¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a corregir esto o lo vamos a dejar así en esa zona franca institucional que aparentemente hay voluntad de crear para cumplir con los organismos internacionales y luchar contra el lavado de activos, el terrorismo internacional y las armas de destrucción masiva? Me parece que si lo planteamos claramente, la respuesta es una sola: esto hay que arreglarlo, no puede quedar así. Además de las razones señaladas que son de por sí suficientes, no puede quedar así porque tampoco nuestros tribunales tienen los medios materiales para cumplir con esto. Quien conozca cómo funciona un juzgado penal, sabe perfectamente que es imposible que nuestros juzgados salgan a investigar los delitos y antecedentes que pueden haberse cometido en cualquier parte del mundo. Eso es simplemente un saludo a la bandera, para cumplir, para decir que se previó en la ley la investigación de esos delitos. Esto no se puede hacer porque, no solo está reñido con el sistema institucional vigente sino que, desde el punto de vista material, es de imposible realización.

Hay otras incongruencias que quizás sean problemas de redacción pero no por ello dejan de existir. Por ejemplo, el artículo 42, sobre reserva interna de la investigación, establece: "En las investigaciones relativas a los delitos previstos en los artículos 30 y 33 o de las actividades delictivas establecidas en el artículo 34 de la presente ley no regirá el plazo de reserva de las actuaciones respecto al imputado, su defensor y demás intervinientes, regulado en el artículo 259.3 de la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 2014".

El citado artículo 259.3 establece que a pedido del ministerio público se podrán sustraer del conocimiento del imputado y de su defensor determinadas actuaciones por un plazo de cuarenta días, el que podrá ser prorrogado por el juez mediante petición fundada del ministerio público. Durante el plazo al que se hace referencia en el artículo 42, ni el imputado ni su defensor pueden acceder al conocimiento de las actuaciones. Cuando se dice que ese plazo no va a regir, queda vigente el régimen general, que es el que establece el artículo 259.2, que determina que el imputado y su defensor, así como la víctima, podrán examinar los registros y documentos de la investigación fiscal. Es decir, que pueden acceder al conocimiento de todo eso sin restricción. ¿Lo que se quiso decir en este artículo 42 es que en estos delitos, en esta materia, el imputado, su defensor y eventualmente la víctima podrán acceder al conocimiento de las actuaciones en todo tiempo, sin que se pueda establecer reserva alguna? ¿O se quiere establecer exactamente lo contrario, es decir, que se puede determinar la reserva sin plazo?

—Leyendo esta normativa que procura perfeccionar y fortalecer las herramientas contra este tipo de delitos, tengo la impresión de que lo que se quiso decir fue que no habrá plazo para la reserva. Pero en la forma en que quedó redactado, lo que se dice es que no habrá plazo de reserva y, por lo

tanto, en todo tiempo, las personas mencionadas podrán acceder al conocimiento de las actuaciones. Me parece que es exactamente lo contrario de lo que debe haber sido la intención de los redactores.

Hay otras disposiciones que nos merecen observaciones, siempre en el campo al que antes me refería, de las facultades de esta secretaría nacional antilavado. Se dice que podrá requerir información de todos los organismos públicos y fijarles un plazo para la entrega de esa información, sin excluir de esta disposición a los órganos del Poder Judicial. Entonces, tenemos una secretaría nacional antilavado que le va a poder pedir información a los tribunales y juzgados de la República, y ponerles un plazo para que la proporcionen, sin reserva alguna. Advierta, señora presidenta, que esa facultad no la tenemos ni nosotros: el Parlamento no puede pedir informes en materia jurisdiccional. ¿Por qué? Lo dice expresamente el artículo 118 de la Constitución: para preservar la separación de Poderes, nada menos. Sin embargo, a esta secretaría, que funciona en el ámbito de la Presidencia, se le permite que pida informes a todos los organismos públicos, inclusive los del Poder Judicial -nada los excluye-, que les ponga un plazo para contestarlos, y no se establece reserva alguna a esta facultad. Me parece que se ha ido, evidente-mente, demasiado lejos.

Por estas razones, señora presidenta, vamos a acompañar el proyecto en general, pero votaremos negativamente una serie de disposiciones, algunas que ya hemos indicado y otras que mencionó en su momento la señora diputada Bianchi.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PASQUET (Ope).- Sí, señora diputada.

SEÑORA PRESIDENTA (Lilián Galán).- Puede interrumpir la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señora presidente: quiero dejar las cosas claras. Por algo no votamos el proyecto en el Comité operativo. También coincido con el señor diputado, por eso queríamos que se discutiera en el plenario.

Oponernos a la formación de la secretaría en el ámbito de la Presidencia era -voy a ser bien clara- dinamitar la posibilidad de negociación desde el primer momento. Como nosotros lo entendimos -cuando digo nosotros, me refiero a quien habla en consulta con los líderes de mi partido, con ambos, los más representativos en ese momento, claramente, para no andar con eufemismos: Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga; después fueron surgiendo otros, pero en ese momento estaban ellos-, el tema no era dinamitar la posibilidad de participar, porque hay un problema, y quiero dejarlo bien claro. En mi exposición no pude decir todo lo que quería, así que agradezco al diputado Pasquet que me permita esta intervención.

Tuve una entrevista personal -no privada, porque no me muevo de esa manera y, si así fuera, no lo diría- con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Chediak, porque sentí una preocupación desde el primer momento, participando en el Comité operativo: que los jueces de crimen organizado no podían concurrir, por razones obvias. Todos los que conocemos

cómo trabajan los jueces -ni qué hablar los jueces ordinarios- sabemos que los de crimen organizado no podían concurrir -casi nunca lo hacían-, y comuniqué mi preocupación a la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente, en ese Comité operativo faltó el aporte de los jueces de crimen organizado y la visión jurídica y, además, judicial. Reitero: es otra de las razones por las cuales tampoco hubiéramos votado el proyecto en la Torre Ejecutiva ni en la Secretaría. Quiero que quede claro que el doctor Chediak -lo habrá podido resolver o no- está enterado de esta preocupación, que fue tan importante que se la planteé casi al terminar el proceso.

Quiero agregar algo más, para que nos entiendan. La muerte del licenciado Díaz motivó un interregno bastante importante en el proceso de elaboración, y un corte en el trabajo, que se retomó después que fue nombrado el contador Espinosa. Sin embargo, ya se había terminado de redactar el proyecto por la Secretaría y algunas personas que participaron de esas reuniones en las que no estábamos nosotros.

Gracias, señora presidente.

SEÑORA PRESIDENTA (Lilián Galán).- Puede continuar el señor diputado Pasquet, a quien le restan once minutos de su tiempo.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señora presidenta: no los usaré totalmente.

Me estaba refiriendo a la facultad de requerir informes de la secretaría nacional antilavado. Está legislada en el artículo 6º del proyecto que dice: "[...] estará facultada para solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos, los que se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijado por la Secretaría, no siéndole oponibles a esta disposiciones vinculadas al secreto o la reserva".

Cuando, por ejemplo, la secretaría nacional antilavado le pide a un abogado informes que pueden afectar el secreto profesional, ¿tiene derecho a exigir que le dé la información, aun violando el secreto profesional, en virtud de este texto que acabo de leer, que dice que no le serán oponibles las disposiciones vinculadas al secreto o la reserva?

Hemos visto que la secretaría nacional antilavado puede pedir informes a todos los organismos públicos; no hay ninguna restricción, salvedad ni excepción. Puede pedir informes a un juzgado acerca de lo que declaró un testigo protegido. La figura del testigo protegido está regulada en el Código del Proceso Penal; ese testigo declara con una serie de garantías que impiden el conocimiento de su identidad, precisamente, para protegerlo. En función de esta disposición ¿la secretaría nacional antilavado puede pedir al juzgado penal información que ponga en evidencia la identidad de un testigo protegido? ¿Son tantas sus facultades? ¿Tan lejos puede llegar? Leyendo el texto del articulado no encontré una respuesta negativa. Me temo que así como está, todo eso se puede hacer y me parece violatorio de garantías y derechos elementales que demuestran cuán lejos se ha ido en la atribución de facultades a este organismo.

Por estas razones, señora presidente, no voy a votar las normas del artículo 4º al artículo 8º, es de-cir, la parte orgánica de la ley; votaré todas las

otras, aún de este mismo capítulo, con la finalidad de contribuir al logro de los propósitos de la ley, pero por las razones expuestas, estas las votaré negativamente.

Muchas gracias.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Lilián Galán).- Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Asti.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señora presidenta: voy a hacer dos acotaciones.

El texto establece que por la normativa internacional, por las convenciones de Naciones Unidas, se hace referencia a las medidas antiterrorismo.

En primer lugar cabe aclarar que este grupo dividió su trabajo en el proyecto de ley integral de lavado de activos y otra iniciativa integral de lucha contra el terrorismo. No nos correspondió a nosotros participar en ese grupo; otros actores fueron los que intervinieron en ese tema.

Uruguay, con su tradición de participar activamente en la comunidad internacional -bueno, todavía somos miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante este mes-, mantiene un compromiso ineludible en combatir estos flagelos. En particular, el lavado de activos tiene vinculaciones con la lucha contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Por otra parte, como ya dije, esta iniciativa actualiza, sistematiza, ordena e independiza la legislación sobre lavado de activos de la normativa antidrogas.

En particular, todo lo relativo a la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos ya está legislado. Hoy, tiene el rango que le dio, si no me equivoco, la ley de presupuesto de 2015. Aunque existía desde antes, se le dio un distinto nivel institucional como organismo descentralizado de Presidencia de la República, con independencia técnica.

Por lo tanto, eso no es una novedad de este proyecto de ley.

Estos son los dos asuntos que quería aclarar: que el Poder Ejecutivo envió de forma separada un proyecto de ley global contra el terrorismo, que también fue motivo de estudio en ese grupo de trabajo -con un grupo *ad hoc* de redacción que nosotros no integramos-, y las relaciones de esta legislación con la actual Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos, que seguirá estando en el mismo ámbito en el que figura en el actual ordenamiento jurídico.

Por otra parte, se precisa un poco más todo lo relacionado con la Comisión Coordinadora Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Como dice en el informe, este organismo tiene una amplia integración: Presidencia de la República -que la preside-, la Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos, los subsecretarios de los Ministerios del Interior, Economía y Finanzas, Defensa Nacional, Educación y Cultura, Relaciones Exteriores, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central y el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

De hecho, esta iniciativa prevé una serie de cometidos para esa Comisión. Así que quizás ahí sí haya más novedades que en el tema referido a la Secretaría.

Por último, se han hecho referencias a la vigencia a partir del mes de noviembre del nuevo Código del Proceso Penal; ya existía, pero se había pospuesto su entrada en vigencia. Seguramente, algún otro compañero legislador más versado en este tema responderá a los comentarios que se han realizado. La realidad es que esto necesariamente deberá ajustarse al nuevo proceso judicial que tenemos en nuestro país.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Lilián Galán).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señora presidenta: en realidad, quiero hacer dos aclaraciones.

En primer lugar, no señalo que esto responde a preocupaciones o iniciativas internacionales en el plano de crítica; lo señalo en el plano fáctico: es así. Ningún país puede escapar a esta situación general hoy en el mundo.

Ante la necesidad de responder a lo que la comunidad internacional demanda se puede actuar rechazando toda exigencia -lo cual me parece que conduce a un aislamiento absolutamente negativo- o se puede aceptar todo lo que nos piden, lo que también es negativo para el interés nacional.

El arte está siempre en encontrar el punto de equilibrio en el cual se satisfagan las demandas hasta donde es posible hacerlo, pero se preserven en otros ámbitos el interés nacional y el ejercicio de la soberanía; hasta donde sea posible hacerlo. ¿Dónde pasa la divisoria? A priori, no hay fórmulas para definir esto. Hay que buscar caso a caso, materia por materia, la solución más conveniente para el interés nacional que, en definitiva, es lo que tenemos que defender.

—Por otra parte, ya sé que lo de la secretaría nacional antilavado viene de antes y no es una novedad absoluta. Por eso decía que como el tema de la creación de secretarías en la Presidencia de la República viene de antes, hoy reitero la posición que vengo sosteniendo hace tiempo: soy contrario a la creación de esas secretarías. Me he opuesto sistemáticamente a ellas en esta materia y en otras, y cuando se replantean vuelvo a oponerme; si mañana proponen otra secretaría en la órbita de la Presidencia, volveré a oponerme.

Esto era cuanto quería decir, señor presidente.

Muchas gracias.

16.- Lavado de activos. (Actualización de la normativa vigente)

—Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Penadés.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Muchas gracias, señor presidente.

Inicio mi intervención manifestando mi absoluto acuerdo con el extenso y excelente informe que la señora diputada Bianchi ha realizado en la mañana de hoy ante el tratamiento de este asunto.

También estoy de acuerdo con los cuestionamientos que sobre este proyecto de ley ha hecho el señor diputado Pasquet.

Digo esto simplemente por economía procesal: para no ingresar en esos puntos y no utilizar el tiempo de que dispongo para referirme a este asunto.

Además, creo que estas fechas ni el espíritu de la Cámara no son los mejores para discutir uno de los proyectos de ley más importantes que en el correr de este año hemos considerado. Es más: la redacción de esta iniciativa y su complejidad, creo que no han merecido de la Cámara de Representantes la atención que debería.

Este proyecto sigue la misma línea de otros que en el correr de estos últimos años hemos votado: responde a una estrategia del Gobierno del Frente Amplio de alinear absolutamente su estrategia en materia financiera internacional a los designios de la OCDE. Esta no es una decisión menor.

No acepto que se argumente que no podemos hacer otra cosa. Creo que sí se pueden hacer otras cosas.

Además, en la gradualidad de lo que se puede hacer, de ser el mejor de la clase a votar con salvedades algunas cosas que se nos imponen, preferiría no ser el mejor de la clase, como hasta ahora puntillosamente ha querido ser el Gobierno en este tema.

Por otra parte, en el marco de un debate bastante maniqueo, relativista y simplista, se asegura que el que no está a favor de esta iniciativa, está de acuerdo con el narcotráfico, el terrorismo y la opacidad. Nada más lejano a nuestra posición que estar de acuerdo con el narcotráfico, el terrorismo o la opacidad. Sí estamos de acuerdo o, por lo menos, pretendemos una defensa de los intereses nacionales que tengan como estrategia central, primero, la elaboración de una política de Estado. En este caso, eso no ha existido.

A este respecto se ha impuesto sistemáticamente lo que el Frente Amplio entiende que debe ser su acción, de acuerdo con lo que la OCDE y el GAFI establecen, que son organismos creados por los poderosos después de la crisis, con el solo objeto de intentar que sus capitales vuelvan a sus países y dejen de invertir en los nuestros. Y para ello han encontrado una herramienta a la que nadie se puede oponer, que es la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra el tráfico de armas nucleares y de destrucción masiva. Yo agregaría que podemos estar a favor del amor universal, en favor del bien y en contra del mal, pero esos títulos hacen que, muchas veces, prestamente, se corra a votar normas como estas, que vulneran el sistema jurídico nacional, que vulneran el sistema constitucional nacional y nuestra independencia. Seamos conscientes de que es así, por lo menos para no asumir tan libremente que "es lo que hay, valor", que no se puede hacer otra cosa. Yo creo que con una conducción política, con una conducción monetaria, con una conducción económica, y con una estrategia de visión de país, dentro del marco de lo que las normas establecen, se podrían hacer cosas que no fueran tan perjudiciales para los intereses nacionales.

Ahora, ¡claro!, es muy difícil razonar cuando se antepone el facilongo argumento de que si uno no quiere eso es porque está a favor de la opacidad, de la década del noventa, etcétera. No pasa por ahí; pasa porque yo no renuncio a que Uruguay tenga la capacidad, a pesar de su pequeñez, de establecer una política exterior estratégica, que le permita fijar posiciones en estos temas, ya que estos tratados pueden tener reparos, establecer condiciones que el Uruguay nunca ha manifestado a la hora de signar sus compromisos internacionales. Eso es lo que me lleva a decir que entre ser el mejor de la clase y, por lo menos, patalear un poco, Uruguay y los últimos gobiernos del Frente Amplio han decidido ser los mejores de la clase. ¿Ventajas tendrá? Me quedan algunas dudas... Por lo pronto, se reconoce que nos hemos alineado, calladitos la boca, a la voz de los todopoderosos que hoy, lamentablemente, controlan al mundo.

Este proyecto de ley tiene algunas incoherencias. Me gustaría denunciar en este plenario la primera, porque en el mismo momento en que se está tratando en el Parlamento -voy a hablar del organigrama- la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, uno de los temas de discusión ha sido su ubicación estratégica, que no fuera en la órbita de la Presidencia de la República, entre otras cosas, por el debido control parlamentario que debe ejercerse sobre tan delicadas instancias. Ahora, en este tema cambiamos de opinión y decimos que sí, que la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo -nada más y nada menos- debe estar en el ámbito de la Presidencia de la República y que, por ende, no puede tener control parlamentario. Entonces, si lo hacemos para una cosa, me parece que debiéramos hacerlo para la otra. De la misma manera, con el mayor de los respetos, dicho por el señor prosecretario de la Presidencia de la República, creo que un tema de esta trascendencia no puede estar presidido por el prosecretario de la Presidencia de la República. Quizás estaba bien en el pasado, pero ante la envergadura, el tamaño y el poder que va adquiriendo en cuanto a saber sobre la vida privada de los ciudadanos, sobre sus ejercicios comerciales, y demás, que dependa de la Presidencia de la República, que no tenga control parlamentario y que su presidente sea el prosecretario de la Presidencia de la República, me parece profundamente equivocado. Además, considero que anula la argumentación que desde el mismo Gobierno se ha sustentado: que Inteligencia de Estado debe estar en el ámbito de los ministerios para que pueda tener el debido control parlamentario.

Al manejarse un tema tan delicado también deberían decirse las funciones de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, porque el financiamiento del terrorismo tiene que ver con el terrorismo. El terrorismo también es una labor de defensa nacional. Señor presidente, si el combate es integral, volver a crear un organigrama burocrático distinto es un profundo error. Además, por las potestades que por esta ley otorgaremos, los que participan de esta Comisión, y mucho más el secretario de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, debieran ser designados con venia parlamentaria porque van a manejar un gigantesco cúmulo de información. Sus responsabilidades políticas serán tan enormes que, francamente, el que dependan de la Presidencia de la República me parece un dislate; que no haya el debido control parlamentario y me parece un profundo

error que no se otorgue venia parlamentaria a un individuo que tendrá esta jerarquía.

El Partido Nacional, por lo menos, propone este requisito para el director de Inteligencia. Entonces, ¿para una cosa sí y para la otra no? Francamente, me parece un grosero error institucional que, lamentablemente, vamos a cometer a la hora de votar.

Lo siguiente que voy a decir, señor presidente -reitero, hago míos el informe de la diputada Bianchi y las objeciones manifestadas por el señor diputado Pasquet-, está relacionado con el concepto de personas políticamente expuestas. Evidentemente, este artículo fue redactado por alguien que no conoce de derecho o hizo un recorte y pegue de algún tratado internacional que establece lo que debe decir. Voy a leer textualmente: "Personas políticamente expuestas. Se entiende por personas políticamente expuestas a aquellas que desempeñan o han desempeñado en los últimos años funciones públicas de importancia [...]" ¿Cuáles son las funciones públicas de importancia? ¿Desde cuándo en el derecho público no se tienen que establecer taxativamente las obligaciones y a quiénes estas le incumben? Sigo: "en el país o en el extranjero, tales como: jefes de Estado o de Gobierno [...]". ¡En el Uruguay no existe el jefe de Gobierno! ¡El presidente de la República es jefe de Estado y jefe de Gobierno a la vez! Esto es copiado un documento de un país donde, evidentemente, existen jefe de Estado y jefe de Gobierno. Estas barbaridades no se pueden dejar pasar así como así. Continúa: "políticos de jerarquía". ¿Qué son políticos de jerarquía? ¿Un edil es un político de jerarquía? ¿Un alcalde es un político de jerarquía? ¿Un ordenador de gastos de una unidad ejecutora de un ministerio es un político de jerarquía?

Continúa diciendo: "funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía". ¿Qué es alta jerarquía? ¿General, coronel, almirante, capitán de navío, capitán de fragata, mayor? ¿Qué es?

"Dirigentes destacados de partidos políticos". ¿Quién va establecer qué es un dirigente destacado de un partido político? Me adelanto a decir que no comparto esa tesis de que lo que no dice la ley lo va a decir la reglamentación, porque es una interpretación absolutamente equivocada, antojadiza y peligrosa de las potestades que estamos dando al Poder Ejecutivo, no a este, a cualquiera. Me opongo, aunque el Poder Ejecutivo fuera de mi propio Partido, porque el criterio tiene que estar expresamente detallado en el artículo para que quede determinado con claridad cuáles son los dirigentes políticos destacados de los partidos políticos.

"Directores y altos ejecutivos de empresas estatales u otras entidades públicas". Esto dice el inefable artículo 20, que vamos a votar en contra, pero además denunciarnos que es de una liviandad que no se corresponde para con la responsabilidad del proyecto que estamos analizando.

Concomitantemente, en artículos anteriores se establece cuáles son las sociedades anónimas o aquellas sociedades que tengan capitales en el extranjero y quiénes no las pueden integrar, ni cinco años antes ni cinco años después. Perfectamente se detalla: el presidente de la República, el vicepresidente de la República, senadores, representantes nacionales, y sigue. O sea, para algunas cosas somos detallistas, como debe ser, y para otras, políticos de

jerarquía. Debo decir, señor presidente, a quien crea interpretar que con esta intervención lo que quiero es excusarme, que no es así, porque en el artículo 20 no se menciona, en ningún momento, a los integrantes del Poder Legislativo, ni a los diputados ni a los senadores. Es más: quiero que sean incluidos taxativamente: que no haya lugar a la interpretación ni a la reglamentación; que quede determinado quiénes son las personas políticamente expuestas.

Debo decir también que alguno de los karmas que cargamos quienes desarrollamos esta noble actividad es, por ejemplo, que cuando uno va una red de pagos a hacer un giro de \$ 1.500 tenga que llenar un formulario por ser una persona políticamente expuesta. A ese grado de ridiculez hemos llegado, pero lo que es peor aún: intente alguna persona políticamente expuesta o que se dedique a la actividad política abrir una cuenta en un banco o sacar un crédito. Nadie está pensando en el narcotráfico ni en nada por el estilo, sino en la sencilla tarea de ir a abrir una cuenta a un banco. Entonces, veremos, señor presidente, que esta definición que es muy anterior al actual Gobierno -es verdad, viene del año 1997- ha ido adquiriendo una trascendencia tal que, por lo menos, trasluce cierta tendenciosidad. No digo que esto sea voluntad del Gobierno, porque no lo agrava de ese modo, pero quienes ejecutan estas medidas, producto de la opacidad de estas, parten de la premisa de que todos los que nos dedicamos a la actividad política somos culpables hasta que demos lo contrario. Esa no es una posición que yo esté dispuesto a permitir que se asuma para con la actividad que nosotros desarrollamos.

Quiero dejar constancia de la trascendencia de la decisión que hoy la Cámara tomará al votar este proyecto y destacar las cosas poco claras que tiene. Esto no implica desmerecer el trabajo de los legisladores que han participado ni mucho menos. Uno de los miembros informantes nos decía que participaron en una parte de la redacción y en otra no, porque estaba encargada a otras personas. Lamento mucho que esto haya pasado por el Senado sin que se hayan dado cuenta, pero no lo digo desde la posición del mejor de la clase -que no es la que pretendo tener en esta intervención-, sino desde la intención de alertar a los miembros de la Cámara -producto de estas fechas, estamos todos pensando en otras cosas- sobre la trascendencia del proyecto que vamos a votar, sus consecuencias y las decisiones estratégicas muy respetables, muchas de ellas no compartibles, que tiene con relación al condicionamiento que en política exterior y en política nacional el Gobierno ha asumido. Reitero: son respetables pero no las compartimos.

En estos temas se pretendió llevar adelante una política de consultas. Valoramos mucho que distinguidos compañeros de esta Cámara hayan integrado la comisión que redactó este proyecto de ley y escuchamos informes realmente muy compartibles y muy buenos, pero no podíamos dejar de verter estos conceptos que nos parecen centrales, porque lo que estamos haciendo es sumar institucionalidad a institucionalidad que, a la postre, termina aumentando el gasto y no siendo eficiente ni eficaz. Además, debido a la jerarquía política que esto tenía en el pasado -evidentemente, no es la misma-, consideramos que una comisión de esta trascendencia no puede estar ubicada en la Presidencia de la República, sin el debido control parlamentario. Tampoco puede ser que el secretario de dicha comisión, una persona que va a manejar información de altísimo nivel y de delicadeza trascendente, no cuente con el

aval de todo el sistema político a través de la venia parlamentaria correspondiente para su designación. Parece ser que por este camino vamos yendo, pero también hay que defender y no olvidarnos de la integridad del ciudadano, de su derecho a la privacidad -consagrado en la Constitución de la República-, de su derecho a la legítima defensa y de la responsabilidad del Estado de salvaguardar el debido secreto sobre asuntos que pueden comprometer la reputación y el honor de ciudadanos. Eso no se puede abandonar tan libre-mente y, al menos, quería dejar constancia de ello.

Reitero: sin perjuicio de que el combate al terrorismo, al narcotráfico y al tráfico de armas es un fin que compartimos en su totalidad, a veces puede ser utilizado como excusa por algunos, para ver quiénes y de dónde vienen a invertir, cuánto deben invertir y dónde deben tributar. Esto ya no es una sospecha, sino una realidad que ha sido consagrada en el pasado, en tratados internacionales que el Parlamento ha convalidado y es parte de la estrategia política del Gobierno que pretendimos poner en conocimiento de los miembros de la Cámara o, por lo menos, refrescar el concepto.

Es así que vamos a votar en general este proyecto de ley, pero queríamos dejar estas constancias en sala -acompañando el informe de la señora diputada Bianchi-, con gran preocupación, sobre algunos de los contenidos de este proyecto.

Nada más y muchas gracias.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: en más de una intervención se ha hablado de que Uruguay intenta ser el mejor de la clase debido a los dictámenes de la OCDE. Yo dije que Uruguay quiere ser miembro de la comunidad internacional, de la cual se siente partícipe y, en ese sentido, varias convenciones de Naciones Unidas a las cuales hemos adherido piden tipificar el lavado de activos, en particular la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Se establece que los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves y establecer sanciones penales eficaces, proporcionales y disuasivas a las personas naturales condenadas por lavados de activos.

Conforme a lo previsto en la Convención de Viena de 1998, que hace un momento mencionaba, se pide también que ante la comisión del delito de lavado de activos se apliquen sanciones proporcionales a su gravedad. Por otro lado, la Convención de Palermo de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional -que es norma legal, la Ley N° 17.861, en nuestro país desde el 28 de diciembre de 2004; olvidé citar la Ley N° 16.579, de 1994- establece que cada Estado Parte deberá incluir como delitos determinantes todos los delitos graves que guarden relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

Por lo tanto, señor presidente, no se trata solamente de lo que nos mande hacer la OCDE, sino de exigencias que la comunidad internacional -como hemos

reiterado-, a través de convenciones de Naciones Unidas, establece a todos los países. Nosotros queremos aceptar esas exigencias y, por el bien de nuestro país y de la comunidad internacional, aplicar estas normas.

En particular, se hizo referencia al artículo 20. La señora diputada Bianchi tuvo la picardía de leer mis opiniones al respecto, cuando señalé mis diferencias con la redacción de ese artículo, pero no dio lectura a lo que se nos respondió en la comisión por el secretario Nacional antilavado de activos. Esta norma es, si se quiere, recorte y pega de normas internacionales. ¿Por qué? Porque el delito de lavado de activos también se persigue cuando estas personas políticamente expuestas de otros países lo cometen en nuestro país; o sea, cometieron delitos prece-dentes en otros países y luego cometen el delito de lavado de activos -es un delito autónomo- en nuestro país. Por eso, es necesario mencionar cargos como jefe de Gobierno, que no existe en nuestro país, pero sí en otros países, para poder comprender a todos aquellos que las convenciones prevén que son personas políticamente expuestas y cuya actividad se debe controlar especialmente, para ver si cometen delitos en sus países y, luego, lavan en otro país.

Reiteramos que este Gobierno intentó que esto fuera una política de Estado y, por eso, funcionó el grupo operativo de apoyo a la Secretaría Nacional antilavado de activos con una amplia integración, también con miembros de la oposición. Aclaro que cuando dije que no habíamos participado fue en la parte vinculada al terrorismo. Sí participamos en todo el trámite, desde mi primera legislatura en 2006-2007. Estamos trabajando en estos temas desde el inicio, en la originalmente llamada Comisión de los Tres Poderes.

No podemos decir que no tuvo un tratamiento afinado en las comisiones respectivas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, porque en ambas se trabajó y se recibió a todas las delegaciones que aceptaron concurrir; alguna no quiso y por eso nos vimos privados de su asesoramiento.

18.- Lavado de activos. (Actualización de la normativa vigente)

—Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor diputado Jorge Gandini.

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: antes que nada quiero decir que voy a ser breve y concentrarme en algunos puntos muy concretos, dado que el informe que ha realizado nuestra compañera, la diputada Bianchi, ha sido muy elocuente, muy completo y nos ha representado cabalmente en sus expresiones. Del mismo modo lo ha hecho el diputado Penadés. De manera que solo voy a agregar algunos aspectos que deben ser destacados.

Se habla de una tendencia internacional en este tema, que encubre la idea de que hay una enorme presión sobre Uruguay, con la sanción posible de quedar fuera del circuito de los países serios, por lo cual es necesario aprobar este tipo de normativas que hace tiempo vienen llegando al Parlamento, que implican cambios sustanciales en algunos aspectos. Es verdad, en parte, pero también es verdad que Uruguay negocia mal en esos ámbitos. Negocia mal porque parte de la base de que tiene que hacer bien los deberes, tiene que ser reconocido como uno de los países que va adelante en esa tendencia, debe

quedar fuera de cualquier sospecha y, por lo tanto, acepta condiciones que otros países no aceptan.

Se decía que al Uruguay se le pide. Esa fue la expresión que se usó. ¿Quién le pide a Uruguay? A veces le piden los países que no cumplen con lo que nos piden. A veces le piden países que tienen paraísos fiscales en su territorio, verdaderas islas con reglas propias que sirven para depositar dineros mal habidos. Son paraísos fiscales sin los controles que nos exigen a nosotros, y pertenecen a los países centrales en el mundo. Son estos países centrales los que nos piden a nosotros y se aseguran de que solo en sus territorios, a veces distantes del centro y otras dentro del mismo -como en Estados Unidos-, se puedan aplicar otras normas.

Uruguay negocia mal y acepta cosas que no debiera haber aceptado. Si el gobierno fuera blanco o colorado estaríamos escuchando a legisladores del actual oficialismo acusarnos de estar alineados al capital financiero internacional y a sus directivas; pero son esas directivas las que hoy el Uruguay sigue, sin cuestionarlas demasiado.

Hoy la Cámara está legislando un tema árido, complicado, haciendo confianza. Creo que la mayoría de los legisladores de todos los partidos hacen confianza en los tres o cuatro legisladores que trabajaron en la Comisión. Yo asistí muy pocas veces -cuatro o cinco durante una hora-, en ocasión de sustituir a un compañero, ya que coincidía con la reunión de la Comisión Administrativa. Por lo tanto, no pude estudiar mucho el tema; entré de atrás, además. Varias veces cuando yo me iba se quedaba sin número. De hecho, se aprobó por cuatro votos en cuatro. Creo que este tema no ha sido estudiado por la mayoría de los legisladores, no es conocido, no fue profundizado. Muchos colegas no tienen claro siquiera qué es esto del delito precedente, que es la base histórica del lavado de activos, que requiere que el dinero proceda de la comisión de otros delitos. Me parece que se está legislando haciendo confianza, en un tema realmente serio, complejo, que va a traer consecuencias para la vida del país y de muchos de los actores de la economía y de la sociedad en general.

Creo que hay una definición amplia y estricta al mismo tiempo de aquellos que quedan obligados a denunciar la eventualidad de la comisión de un delito de lavado. La base con la que se construye la ley es que todos estamos bajo sospecha; todos. Algunos intermediarios de las actividades comerciales y empresariales del país están obligados a sospechar de sus propios clientes, a denunciarlos bajo la pena posible de ser encubridores o coautores de un delito. Si debieron denunciar y no lo hicieron tendrán responsabilidad, que podrá ser penal. Todos estamos bajo sospecha y los obligados tienen que hacerse cargo de determinadas obligaciones, sin contar con la información necesaria o las herramientas para obtenerla y saber si tienen que denunciar o no.

En la legislatura pasada presenté un proyecto de ley para salvar la responsabilidad de los escribanos, pero vale hoy para los contadores, los abogados y otros intermediarios o profesionales que actúan en la intermediación de negocios. Es imposible pedir a un escribano que haga lo que no hace un banco. Mi proyecto de ley era de puro y estricto sentido común: si el dinero que se pone como pago en un negocio procede de un banco instalado

en el país no requeriría -en mi visión- que el escribano denunciara nada. Ese dinero viene del sistema financiero y este tiene controles estrictos. Además, tiene los recursos apropiados, tecnológicos y humanos, para dar seguimiento, bajo las garantías del secreto bancario, al origen de ese dinero.

Si aparece una persona a comprar una estancia con un cheque de un banco privado o público de este país, y ese banco le dio el cheque y no hizo objeción al depósito del dinero que justifica ese cheque, ¿cómo quieren que el escribano sepa más que el banco? ¿Qué le pedimos al escribano que haga? ¿Cómo podemos exigirle que sea diligente a la hora de interpretar el origen de ese dinero o el destino que iba tener un negocio, y denunciar a su propio cliente -a quien a lo mejor pierde en esa ocasión y para siempre-, porque está obligado a sospechar de alguien al que conoce hace mucho tiempo? Es irreal que sea así; sobre todo, carga de obligaciones a un ciudadano que no tuvo la formación ni tiene el equipo, los recursos ni el marco legal necesario para averiguar o hacer pesquisas, que sí tiene un banco. Sin embargo, así venga el dinero de un banco, está obligado a hacerlo.

¡Obviamente que si se va a comprar una estancia con una valijita o una mochila -como en las películas- donde hay efectivo, está obligado a preguntarse de dónde vino ese dinero y por qué esa persona, en vez de llegar con una letra de cambio, llega con US\$ 3.000.000! ¡Está bien! ¡Se entiende! Pero si no es así, si viene con una letra de cambio de un banco de plaza, que lo que garantiza es que el dinero está depositado -ni siquiera es un cheque diferido; el banco firma que el dinero está ahí-, que el banco aceptó la transferencia o el depósito de ese dinero, y se supone que, para hacerlo, desplegó sus servicios dentro, incluso, de la normativa del secreto bancario para conocer el origen y, conocido el origen, lo aceptó, ¡cómo le vamos a pedir al escribano que diga: "Bueno, como trajo el dinero en una letra de cambio, que es más de lo que supuse podía traer, lo tengo que denunciar"! Pues esto es lo que sucede con este tipo de legislación.

Y, como dijo con enorme elocuencia el diputado Gustavo Penadés y había adelantado la diputada Graciela Bianchi, cuando vemos a las personas expuestas políticamente, se sigue manejando una lista elaborada por el Banco Central, porque la normativa es -ahora será también- genérica y muy amplia a la interpretación: funcionarios gubernamentales judiciales, militares de alta jerarquía, dirigentes destacados de los partidos políticos, o sea, ni siquiera tienen cargos públicos, ¡todos bajo sospecha! Pero también están nuestros familiares. Un día, una de mis hijas vino con cara de susto porque fue por primera vez a un banco a pedir una tarjeta, le hicieron llenar un formulario y le preguntaron si tenía un pariente político, y tuvo que confesar, bajo juramento, que sí. Y me vino a preguntar por qué era eso, qué pasaba, porque ¡claro, su padre está bajo sospecha, y ella, en consecuencia! Pero el artículo 19, que establece las medidas de debida diligencia intensificada y las detalla en el enfoque de riesgos, en la aplicación que deben hacer los sujetos obligados, que deben intensificar los procedimientos, cuando entra en los literales, dice: "Asimismo, se deberán definir procedimientos especiales de debida diligencia para: A) Las personas políticamente expuestas (así como las relaciones con estos, sus familiares y asociados cercanos) [...]".

Supongo que cuando dice "asociados cercanos" no habla de socios. Es decir, supongo que todos los integrantes de mi Secretaría -como las de todos los colegas diputados— están bajo sospecha. No hay una definición estricta. Ahora, para definir quiénes estamos obligados a la declaración jurada de bienes e ingresos se hace una descripción taxativa, se sabe quiénes son; ison como cuatro mil! Si está en algún lugar donde maneja algún fondo público, firma alguna decisión importante, etcétera, va a estar obligado. En esta iniciativa es genérico, y en la generalidad es excluyente, porque al final del artículo 20 se establece: "[...] directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas". No sé, yo les pregunto a ustedes: ¿los directores de la Corporación Vial del Uruguay -que es la que nos cobra todos los peajes; entran millones de dólares-, que es una sociedad anónima, o sea que funciona bajo el derecho privado, cuya propietaria es una persona de derecho público no estatal, y de la Corporación Nacional para el Desarrollo, están obligados? No están obligados ni siquiera a hacer licitaciones; o sea, contratan la obra pública como una empresa privada, no pasa por el Tribunal de Cuentas, no tienen una serie de controles. Creo que ahora, por alguna reforma que hicimos -se acordará mejor que yo el diputado Asti-, tienen que hacer declaración jurada, pero ni siquiera eso tenían que hacer. ¿Estas personas están obligadas? Parecería que no, que no son personas expuestas políticamente. Y como estas, podríamos mencionar a muchas otras que tienen ese vínculo muy estrecho con los fondos públicos, en tanto los manejan, ganan y pierden -a veces pierden, y pierden mucho-, y no son responsables como personas expuestas políticamente.

Por lo tanto, las definiciones que se expresan ponen bajo sospecha al sistema político y dejan afuera a otros, pero nos ponen a todos bajo sospecha. Me parece que es un mecanismo demasiado amplio y sujeto a la discrecionalidad del jerarca, y al final nos manejamos por una lista que elabora el Banco Central.

Señor presidente, creo que el proyecto, aun así, no resuelve el problema de fondo. Vigilamos con mucho celo a los ratones, mientras los elefantes siguen pasando. Me parece que en el mercado hay mucha plata negra, producto de delitos notorios, que no son cometidos por políticos necesariamente, y nadie sabe dónde termina. El volumen del microrcoteo, que nace del gran narcotráfico y se transa en Uruguay, debe ser fenomenal. Ahora, ¿dónde está ese dinero? En algún lado está; quizás en ladrillos, pero lo estamos controlando mal; seguramente, lo estamos controlando mal. No es con este tipo de mecanismo, por el que se pone bajo sospecha a todos, que lo vamos a resolver porque, de hecho, no lo resuelven.

Por lo tanto, la tentación de votar en contra todo el proyecto es muy grande. En principio, para marcar la intención de que estas cosas deben hacerse, lo vamos a votar en general, pero muchos artículos, que lo que reflejan es el tipo de solución, los vamos a votar en contra.

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Sí, señor diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir el señor diputado.

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor presidente: refrendando el informe muy prolijo de la diputada Graciela Bianchi y los aportes de los compañeros, en estos minutos queremos hacer mención, fundamentalmente, a algunos aspectos con los que ya se adelantó que no estamos de acuerdo y también hacer referencia a un camino recorrido y errático al momento de hablar, en primer lugar, de los sujetos no financieros. Hay determinados profesionales, contadores, abogados, escribanos, que están poco menos que encargados de dilucidar hasta cuestiones de terrorismo. Se les pide que busquen en una lista de la ONU si su cliente o una persona que vaya a intervenir en un negocio figura entre quienes son buscados por terrorismo. Con la excusa de que deben actuar con la debida diligencia -no hablemos de lo que el escribano considera una operación sospechosa, ya que estamos de acuerdo con que si el profesional entiende que hay una operación sospechosa se deben detonar determinados mecanismos para poner en conocimiento a las autoridades que algo puede pasar en materia de lavado de activos, pero esa ya no es la regla-, se ha convertido en regla que determinados profesionales, por ejemplo los escribanos -bajo la mentada diligencia debida, que ya no es diligencia debida sino que es un liso y llano traspaso de funciones inherentes al Estado, que se las ha traspasado-, tengan que hacer una suerte de pesquisa, indagar, bucear entre las características de sus clientes, de las personas que intervienen en los respectivos negocios y, como bien dijo el diputado Jorge Gandini, hacer controles que corresponden al Estado. Si alguien aparece en un negocio comprando con una letra de cambio, con un instrumento financiero, con un instrumento de pago dado por una entidad financiera, es ilógico que el escribano tenga que volver a controlar y preguntar al cliente, en esa mentada diligencia debida: "¿De dónde sacó el dinero?". Si el cliente le responde: "Lo saqué del banco", le debe decir: "No; pero, ¿cómo lo hizo?". Esas son preguntas que tiene que hacer el banco al cliente, no otra vez el profesional. Se ha instalado una suerte de Gestapo a nivel de los profesionales, la Senaclaft, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que anda poco menos que persiguiendo a los profesionales, pidiéndoles cosas que creemos están por fuera de la norma. Con este proyecto de ley volvemos a incurrir en el mismo inconveniente.

Podremos votar este proyecto en general, pero hay muchos reparos en votarlo en particular por sus inexactitudes, por sus problemas de redacción y, entre otras cosas, porque delega en el Poder Ejecutivo, en su función de reglamentar la ley -como pasó con otras leyes-, la imposición de obligaciones y de cargas a los profesionales que no condicen con la realidad de lo sancionado por este Parlamento. Esto atenta contra un principio fundamental del que Uruguay históricamente fue fiel custodio: la seguridad jurídica. Cada vez se traba más, cada vez se delega más en quienes intervienen en estos negocios aspectos que conspiran contra el normal desenvolvimiento de esa actividad negocial.

Quiero referirme también a las personas políticamente expuestas. En el mes de junio, en esta Cámara, denunciemos que en los listados de las personas políticamente expuestas de este país no estaba nada más y nada menos que el ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori. ¿Cómo se confeccionan esas listas, que nada más y nada menos el ministro de Economía y Finanzas, en junio, no integraba el elenco de personas políticamente

expuestas? Seguramente es un error, pero de esos errores pueden cometerse muchos.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar el señor diputado Jorge Gandini.

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente...

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- ¿Me permite otra interrupción?

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Sí, señor diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir el señor diputado.

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor presidente: estos son los momentos en los que, por la complejidad técnica que supone el análisis de estas normas que hoy se aprobarán, terminaremos aprobando disposiciones que conspiran contra el normal desenvolvimiento de la actividad comercial en este país e imponiendo cargas aun más gravosas de las que ya tienen determinados elencos de sujetos, en este caso no financieros, como contadores y escribanos, a quienes ahora se les pide que sepan desglosar un balance -para lo que no fueron preparados-, evidentemente desconociendo la actividad inherente al Estado en materia de control. Por lo tanto, señor presidente, adelantamos que este tipo de normas no van a contar con nuestro voto.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Gandini.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar el señor diputado Jorge Gandini.

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente...

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Sí, señor diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir el señor diputado.

SEÑOR TROBO CABRERA (Mario Jaime).- Señor presidente: obviamente, compartimos las expresiones de los representantes que en nombre del Partido Nacional han hecho uso de la palabra acerca de distintos aspectos de este proyecto de ley.

Reiteramos la preocupación manifestada sobre los artículos 19 y 20, que refieren a las medidas de debida diligencia intensificada y a las personas políticamente expuestas, agregando algunas preguntas para que se nos respondan claramente en esta circunstancia.

Ya se ha mencionado el grado de indeterminación que existe respecto a quiénes son alcanzados y a lo grave que resulta para la tranquilidad y la libertad de las personas tener algún tipo de vínculo con quienes, en términos generales, sean incluidos en esta norma, que no es para nada precisa, taxativa ni clara y que, además de no ser clara, tampoco incluye, en los pésimos términos en los que está redactada, a gente vinculada con actividades que tienen un gran poder político y económico. Yo pregunto por qué en el artículo 20 no están incluidos los dirigentes sindicales, y quiero que se me

explique. En toda América Latina se han revelado hechos de corrupción, que en muchos casos vinculan a dirigentes sindicales con grandes eventos o circunstancias de esas características. Yo me pregunto, ¿en nuestro país, en algunos casos, los dirigentes sindicales no tienen más importancia que algunos de los políticos que se incluirían en el artículo 20? ¿No tienen más capacidad de decisión y de negociación con los empresarios o con quienes están viviendo una circunstancia de conflicto? ¿Por qué no están incluidos los dirigentes sindicales? ¿Por qué no están incluidos los dirigentes deportivos? Los escándalos producidos en Latinoamérica por las constructoras brasileñas, la Confederación Sudamericana de Fútbol y la FIFA son los más impresionantes en materia de corrupción, con cifras que superan la imaginación: decenas, cientos y miles de millones de dólares manejados como premios, arreglos o cualquier tipo de negocio en contra de la lealtad comercial o deportiva. ¿Por qué no figuran? Alguien nos tiene que explicar por qué estas personas no están incluidas. Que no se diga que los va a incluir la reglamentación o que la semana que viene va a aprobarse una ley cuyo artículo 1º establezca que se incluye en el artículo 20 de la ley tal a los dirigentes sindicales y a los dirigentes deportivos. Esto debe tener una explicación.

Hemos afirmado que el artículo 20 tiene una redacción antojadiza, y la tiene, además, cuando se lo vincula con el artículo 19, siendo gravoso para personas indeterminadas, sometidas a un régimen especial sin que lo sepan y sin que haya una razón para estarlo. Estos aspectos, para nosotros, son muy importantes, y revelan la falta de profundidad y de seriedad en el tratamiento de alguno de los temas que tienen que ver con la imposición de organizaciones internacionales que le dicen al Uruguay: "Tiene que hacer esto", y Uruguay lo hace. De tal modo lo hace que comete errores gravísimos, algunos violatorios de la Constitución y otros del sentido común, porque dígaseme por qué no figuran -como ya manifesté- los dirigentes sindicales o los dirigentes deportivos. En Uruguay hay ejemplos muy claros de individuos que han sido líderes en la corrupción internacional del deporte y, sin embargo, no están incluidos en la debida diligencia ni en la debida diligencia intensificada, en el caso de la aplicación de esta norma.

La otra pregunta que quiero hacer, porque entiendo que es muy importante dejarlo claro, tiene que ver con el artículo 27, del Capítulo III, que refiere al intercambio de información. ¿Para qué Uruguay sigue firmando y negocia acuerdos de intercambio de información tributaria con otros Estados si este artículo establece que, al solo pedido de una organización del exterior, de información a la Unidad de Información y Análisis Financiero, por ejemplo el Banco Central, o de alguna de las autoridades vinculadas con el tema de la eventualidad de alguno de los delitos incluidos en el artículo 34 del proyecto -que son absolutamente todos y cualquiera-, se dará la información sin la debida aplicación del acuerdo internacional?

—Uruguay está haciendo acuerdos de intercambio de información tributaria con el objetivo de hacer méritos para recibir la nota de país serio. Ahora ya habrá un artículo por medio del cual no importa haber firmado estos acuerdos ni seguir negociando los acuerdos que se están negociando, porque habrá que dar la información, aunque ello no esté resguardado por un acuerdo bilateral entre dos Estados. Creemos que es necesario que estas preguntas sean

respondidas enfática y claramente en esta instancia del debate parlamentario para que en los anales de la ley conste lo que se diga al respecto.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar el señor diputado Gandini, a quien restan dos minutos de su tiempo.

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: las últimas intervenciones agregan aspectos que nos hacen dudar mucho de nuestro voto.

¿Cómo va a funcionar esto en la práctica? ¡Es terrible! Algunas de estas acciones solo las puede llevar adelante un banco. Imaginen a un escribano, cuando alguien compra algo, diciéndole: "¿Usted es Pepe, tiene un pariente político o trabaja con un político?". Debe extremar ese aspecto porque también está obligado. Eso lo sabe un banco, porque hay que declararlo bajo juramento, pero hay un montón de otras cosas que en la práctica no cierran. Ahora bien, se es responsable.

El señor diputado Trobo hablaba del fútbol, y también podríamos hablar de las ONG -tema que algunos importantes dirigentes del Frente Amplio trajeron en su momento-, que reciben y viven de importantes fondos públicos -en otros países este ha sido un tema muy delicado- y sería infinito.

Por lo tanto, dejamos plasmadas todas estas preocupaciones, inconsistencias del proyecto de ley, que nos acercan a la enorme tentación de votar en contra toda la iniciativa. De todas formas, seguiremos con lo que el Partido decida.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: las intervenciones referidas a temas que deberían aclararse han sido varias, pero seguramente ahon-daremos en ellos si se reiteran en la discusión particular.

Se ha mencionado que podría exonerarse a los escribanos si en una operación interviene un banco. Cuando una operación resulta sospechosa de este tipo de actividades pueden intervenir varios bancos, no uno, y cada uno puede tener su justificación. En la famosa compra de la estancia El Entrevero se manejaron cinco letras de cambio distintas, con transferencias internacionales; cada una de esas instituciones no sabía qué hacían las otras, y el único que lo superó y no informó fue el escribano interviniente. Sin embargo, a este respecto el escribano aparecería como una figura aislada. En la Comisión, la Asociación de Escribanos del Uruguay nos comentó todo el apoyo que da a sus afiliados -creo que es una de las asociaciones de profesionales que tiene una de las mayores tasas de afiliados- y que trabajan en forma permanente con la Secretaría Nacional antilavado de activos para perfeccionar la confección de formularios y algunas listas e, inclusive, averiguar si alguien está incluido en alguna lista de la ONU.

Debemos recordar que hay una página web en la que figura una lista de personas señaladas por la ONU como terroristas.

Una vez que los sujetos obligados se registren como tales, la Secretaría Nacional Antilavado les enviará toda la actualización y las comunicaciones necesarias para actuar.

Hemos dicho que muchas de estas cosas están vigentes y que esto es una actualización, una sistematización de las normativas y una independencia de la legislación antidrogas a efectos de contar con una legislación propia.

Muchas de estas disposiciones vienen de los años 2009, 2004 o 2002. Cuando se habla de los organismos internacionales a los que hacemos caso, debo decir que el Memorando de Entendimiento entre los Estados del Grupo de Acción Financiera Internacional ha sido aprobado por este Parlamento en la Ley Nº 17.532, de 2002.

Hace un momento se preguntaba por qué en el artículo 20 del proyecto no se había incluido otras figuras. Me extraña que en este artículo se requiera exclusivamente la participación de personas políticamente expuestas; estamos hablando de cargos públicos.

Se ha mencionado a las personalidades sindicales y deportivas. ¿A nadie se le ocurre preguntarse por qué no figuran las empresariales? Si hay corrupción, seguramente no aparezca desde el sindicato sino desde las empresas. En los países vecinos hay ejemplos de empresarios de gran renombre que marcharon presos. ¡Pero se requería a sindicales y deportistas!

Obviamente, esas personas están incluidas en las investigaciones. Reitero que estamos hablando de personas políticas, de la parte pública. Seguramente me digan que no se puede dejar librado a la reglamentación, pero para nuestras personas políticamente expuestas -como dijo el señor diputado Gandini, esa lista existe desde 1997-, tendremos otra determinación, que iremos extendiendo a través de otras leyes.

En nuestra comisión especial sobre transparencia tenemos un proyecto relativo a la ampliación de la cobertura de las declaraciones juradas que obliga a los funcionarios públicos, políticamente expuestos, que son bastante más de cuatro mil, señor diputado Gandini, pues hemos incorporado a más de treinta mil policías con el mismo análisis de riesgo que puede tener el presidente de la República o un ordenador de gastos.

—Por esos motivos, en la ley que obliga a los funcionarios públicos a hacer una declaración jurada, debemos separar e incluir el análisis de riesgos para exigir distintos controles.

También se incorporan entidades que contratan con el Estado, que reciben fondos del Estado, ya sean empresas u organizaciones no gubernamentales.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: no quisiera seguir abundando, pero se plantean ciertos aspectos y debemos aclarar.

Hemos dicho que se trabajó técnicamente muy bien, pero no queremos quedar "pegados" -lo digo entre comillas- a la estricta redacción del articulado.

Yo no he redactado ningún artículo; participamos con el mejor de los climas en el intercambio de los conceptos que serían la base del proyecto. Tal vez no fuimos claros, pero reitero que el fallecimiento de Carlos Díaz provocó una situación de quiebre del proceso; en absoluto eso es adjudicable al contador Espinosa, sino que Díaz falleció en forma súbita. No atribuyo intenciones, pero quiero que quede claro que no redacté ningún artículo, más allá de que ratifico que el clima de trabajo fue muy bueno.

El señor diputado Asti hace un momento refería a la intervención de los escribanos, y es cierto: los escribanos han manifestado -lo hemos vivido personalmente porque estamos obligados con la actual ley; fuimos los primeros profesionales a quienes se determinó esta obligación- que es bueno el relacionamiento con su asociación, que además tiene una comisión especializada en lavado de activos y financiación de terrorismo y permanentemente está trabajando y dictando cursos. También se participa en seminarios internacionales, ocasiones en las que veo a algunos colegas por ser una legisladora interesada en el tema desde hace muchos años. Creo que debe ser la única asociación así, aunque no conozco cuál es la situación del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay ni la del Colegio de Abogados del Uruguay que, tal vez, sean más inorgánico en estas cosas; esto no es una crítica sino un dato objetivo de la realidad.

El problema es que hay una disociación entre la actitud de la Secretaría Nacional antilavado y los funcionarios de la Senaclaft cuando realizan las inspecciones. Estoy cansada -quiero que quede claro- de recibir consultas sobre este tema. Además de tener un hijo escribano y una nuera abogada, tengo compañeros y colegas que permanentemente se están comunicando conmigo para advertirnos que estas inspecciones son absolutamente intempestivas, para preguntar hasta dónde están obligados a contestar, hasta dónde están obligados a mostrar documentación. En serio; esto está pasando. Entonces, tampoco quiero que abordemos el tema de una forma tan liviana que no permita darnos cuenta de que estas cosas ya están pasando, que estas personas se sienten invadidas y que realmente esto les molesta -como han manifestado en la comisión, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados- porque los coloca en una situación difícil. Por ejemplo, los escribanos somos los únicos depositarios de fe pública. Especialmente a los escribanos, esto nos cae como una carga.

En consecuencia, las inspecciones -me refiero, en particular, a lo manifestado por el diputado Pasquet; obviamente, por su formación jurídica sabe qué está vigente- se están haciendo en forma sistemática. Ahora bien, a las inspecciones no va el contador Espinosa, que tiene un don de gentes especial y ánimo de colaborar. No; tal como señalé en el informe, los que están a cargo de las inspecciones las hacen invirtiendo la presunción de inocencia. Así me lo han hecho saber colegas, tanto abogados como escribanos y, por supuesto, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, cuando los recibimos.

Otro aspecto que quiero aclarar con respecto al caso de la estancia El Entrevero -quedó claro que fueron dos bancos y cinco letras de cambio-, y que debemos tener en cuenta, es que al escribano se le impuso una sanción elevadísima que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo levantó. O sea que

cuando estamos legislando debemos considerar esto. Si hay sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entonces no decimos las cosas porque sí. Dicho Tribunal eliminó la multa que se le había impuesto. Lo peor es que ahora sigue la etapa reparatoria, es decir, el juicio por daños y perjuicios y por daño moral. ¿Estamos dispuestos a pagar?

La otra cuestión sobre la que me interesa dejar constancia es que los cambios no están incluidos -esto me preocupó; lo puede plantear y nada más- como sujetos obligados. El Banco Central solo actúa con respecto a los cambios respondiendo a denuncia de parte; el presidente de dicho organismo lo reiteró en dos oportunidades, en dos comisiones. De esa manera, explotan situaciones como la del cambio Hermida -en la que he insistido reiteradamente; dejo constancia- y la del cambio Nelson.

Gracias.

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- Señor presidente: quiero dejar constancia de que no encuentro explicación a la exclusión de los tipos de personas que he mencionado. La explicación fue muy vaga y para salir del paso. Realmente, se incluye a personas que no son políticos, que no son dirigentes políticos. El artículo 19 refiere a personas que tengan alguna vinculación con los comprendidos en el artículo 20. No entendemos por qué el Gobierno no haya tenido la perspicacia de agregar algún artículo que incluyera a las personas notoriamente vinculadas a hechos de corrupción internacional. Creo que ese es otro de los errores que se comete con esta iniciativa: incluir generalizando y excluir sin particularizar en algunos casos notorios que he señalado.

También quiero decir que no se ha respondido lo relativo al artículo 2, esto es, para qué sirven los acuerdos que Uruguay está negociando y ha firmado acerca de intercambio de información, si el artículo 27 se los lleva por delante.

Gracias.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Antes de dar la palabra al diputado Asti, exhorto a todos a evitar las alusiones a fin de avanzar en la lista de oradores y seguir trabajando en los puntos del orden del día que resta considerar.

Para contestar una alusión, tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: como decía algún otro diputado, este tema es difícil y complicado. Por eso, cuando intervenimos solo intentamos complementar algún aspecto que, en un tema tan importante y denso como este, puede quedar oculto para el resto de los diputados que no participaron de la discusión.

Se ha dicho reiteradamente que el lamentable y trágico fallecimiento del querido licenciado Carlos Díaz, de alguna manera, obstaculizó la presentación del proyecto de ley. Al respecto, quiero señalar que esta iniciativa se presentó en noviembre del año 2016, unos cuantos meses antes del trágico fallecimiento. A partir de su presentación, en noviembre de 2016, el Senado empezó a tratarlo.

Por otra parte, es cierto que la sanción que la Secretaría puso al escribano actuante en el caso de El Entrevero fue revocada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero por el monto, dado que en la misma sentencia se reconoce que ese escribano incumplió la normativa.

También cabe señalar que los sindicatos y los clubes deportivos como organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, están incluidas como sujetos obligados. Con respecto a este artículo yo también pedí mayor precisión -tal como consta en la versión taquigráfica correspondiente- porque quería estar seguro de que estuvieran comprendidas las iglesias, como asociaciones civiles. Aclaro, para los que reclamaban que los sindicatos y clubes deportivos estuvieran comprendidos por la norma, que efectivamente están comprendidos como sujetos obligados.

En cuanto al artículo 27, debo decir que es complementario de todo lo que estamos haciendo en materia de tratados de intercambio de información en general. Lo que se establece es específico para la investigación de lavado de activos, que puede no tener otro tipo de consecuencia. No se puede extraer solo del artículo 27 en qué casos se hará intercambio de información con otras entidades por temas vinculados a los delitos previstos, en particular en el artículo 34. Está previsto que se haga entre pares, entre secretarías o unidades de inteligencia financiera que analizan esos casos, porque este es esencialmente un delito de carácter internacional. Las posibilidades de cometer delitos precedentes en un país y realizar el lavado de activos en otro es lo que hace necesario que esos antecedentes sean manejados a efectos de investigar los temas. Por su especificidad, por su particularidad, va mucho más allá de lo que prevén los tratados de intercambio de información que apoyamos en esta Cámara, a fin de que haya mayor transparencia fiscal internacional. Consideramos que esta es una de las herramientas de intercambio de información para casos específicos de lavado de activos que prevé la lucha internacional contra el lavado de activos.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado Iván Posada.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: quiero señalar que el Partido Independiente no está representado en la Comisión Especial con fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y crimen organizado. Por lo tanto, su aproximación a estos temas es a partir del estudio del proyecto de ley que tenemos a consideración y, muy especialmente, de las exposiciones que al respecto se han hecho, tanto en mayoría como en minoría.

En primer lugar, quiero hacer una reflexión de carácter general.

Un país como Uruguay, de economía pequeña, está claramente sujeto al cumplimiento de normas internacionales. Esta es parte de su estrategia de inserción internacional. En consecuencia, como parte de esa estrategia, en la que bien vale la ratificación de los tratados en materia comercial que Uruguay ha firmado -por ejemplo, con la hermana República de Chile-, también es importante el cumplimiento de estas normas de carácter internacional que se exige en función de la lucha contra el lavado de activos y el terrorismo internacional.

Digo esto porque me parece que cualquier partido que estuviera en el gobierno estaría propiciando proyectos como el que hoy tenemos a consideración; seguramente se podría distinguir, en función de la estrategia, el gradualismo con que cada uno podría llevar adelante ese cumplimiento, pero lo que no debería discutirse es que por una cuestión de responsabilidad este sería un imperativo para el gobierno de turno.

Dicho esto, quiero señalar que atendimos muy especialmente el completo y circunstanciado informe de la señora diputada Bianchi, que nos pareció un elemento de juicio muy importante para valorar el proyecto que tenemos a estudio, así como los aportes realizados por el señor diputado Pasquet.

En líneas generales, quiero señalar que votaremos en general este proyecto, porque creemos que en muchos aspectos realmente supone un avance en la legislación vigente en la materia. Sin embargo, en otros casos compartimos los cuestionamientos. No votamos, en su momento, cuando se consideró en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, el que resultó ser el artículo 49 de la Ley N° 19.355 -no votamos varios artículos que estaban incluidos en el Inciso Presidencia de la República-, porque la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo -que se ratifica por el artículo 4°- se creaba como un órgano desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República. En aquel momento dijimos que no votábamos ese artículo porque suponía que esa Secretaría no tendría ningún tipo de control parlamentario y, además, resultaba claro que era violatorio de la Constitución de la República -lo hemos dicho hasta el cansancio-, por cuanto de un órgano de competencia cerrada como la Presidencia de la República dependerían una serie de secretarías, lo que ahora se ratifica a través del artículo 4°.

También son de recibo los apuntes del señor diputado Penadés porque, conforme con las características de esta Secretaría, debería depender del Poder Ejecutivo y no de la Presidencia; se podría establecer una dependencia a nivel ministerial. Además, por la importancia que tiene y que va ganando desde el punto de vista institucional el cargo de secretario, su nombramiento debería requerir venia parlamentaria. Me parece que esto permitiría fortalecer institucionalmente la Secretaría, lo que en este proyecto no está planteado y me interesaba señalarlo.

Por lo tanto, en virtud de estos comentarios, no acompañaremos los artículos 4°, 5°, 6° y 8° del proyecto de ley. Tampoco acompañaremos el artículo 20, porque nos parece que su redacción es un recorta y pega de la traducción de la disposición internacional, como bien señalaba la señora diputada Bianchi, remitiéndose a las manifestaciones de personas que

participaron en la Comisión. Está claro que cuando hablamos de cumplir normas internacionales, en primer lugar nos referimos a adecuar las disposiciones a nuestro Estado de derecho; este es un aspecto que debe respetarse. Las normas internacionales se acuerdan, pero se cumplen dentro del marco de la Constitución de la República y, por tanto, merecen una adecuación a esa realidad.

En ese sentido, el artículo 20 podría tener una mejor redacción que esta ambigua que se plantea. Está claro que dicha ambigüedad responde a que no solo se habla de funciones públicas de importancia en el país sino también en el extranjero, pero podrían haberse distinguido las funciones públicas en el plano nacional y referir a quienes estamos comprendidos en las normas de presentación de declaraciones juradas ante la Jutep, a efectos de establecer en forma taxativa a quienes desempeñamos cargos en ámbitos nacionales.

También me importa aclarar que este tipo de escrutinio financiero que se realiza a nuestra actividad no nos genera ningún tipo de prevenciones; al contrario, me parece que para quienes ejercemos una función pública supone una garantía y, si esta Secretaría u otros ámbitos competentes no encontraran nada cuestionable, eso hablará bien de nuestro sistema político. Por lo tanto -reitero-, esto no me genera ninguna prevención.

De todos modos, creo que este artículo está mal redactado y que perfectamente se podrían distinguir las funciones públicas en el país y, a renglón seguido, establecer una referencia a los cargos en el exterior. Entiendo que esa redacción habría sido mejor que esta mala copia de una disposición internacional.

Tampoco acompañaremos el numeral 25) del artículo 34. En este sentido, compartimos los argumentos de la señora diputada Bianchi y la referencia que en particular hizo al doctor Aller como especialista en derecho; ni el artículo 42, por las razones que expuso el señor diputado Pasquet pues, notoriamente, este artículo tiene el objetivo de buscar lo contrario de lo que se dice, que estaría en línea con los artículos anteriores. Sin embargo, se comete un error en la redacción y, en consecuencia, dice exactamente lo contrario.

Por cierto, tampoco votaremos el Capítulo VI, "De las medidas cautelares", por las razones que también manifestó el diputado Pasquet, en cuanto a la falta de adecuación de este capítulo al nuevo Código del Proceso Penal.

En líneas generales, creo que ha quedado expresada la posición del Partido Independiente con relación a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora diputada Bettiana Díaz Rey.

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- Señor presidente: vamos cerrando el debate con respecto a este proyecto y quiero dejar en claro algunas cosas como, por ejemplo, que esta iniciativa es parte de una serie de políticas sobre las que he trabajado por el gobierno del Frente Amplio, y que apuntan a adecuar determinadas normativas a los estándares internacionales, así como a la lucha por la transparencia fiscal y el desestímulo de la utilización, por ejemplo, de sociedades con fines ilícitos.

Básicamente -ya lo han dicho varias legisladoras y varios legisladores preopinantes-, lo que hace este proyecto es compilar y sistematizar, dar un orden a la normativa vigente en materia de lavado de activos. Asimismo, se enfatiza todo lo que tiene que ver con los controles de prevención; en eso se ha situado la discusión en este plenario.

Una de las cosas que se planteaba era la inclusión de los delitos precedentes en este proyecto de ley. Al respecto, se citaban las palabras de varios expertos que han trabajado en este tema. Con relación a la creación del delito precedente de evasión y los delitos fiscales, el secretario Nacional antilavado, Daniel Espinosa, en declaraciones a radio Del Sol FM, el 7 de setiembre de 2017, dijo que el proyecto de ley sobre lavado de activos fue aprobado por el Senado y tiene como principal cambio la inclusión del delito fiscal como precedente al lavado. Además, señaló: "El delito fiscal es una vía muy gruesa, por eso en 2012 después de muchas discusiones, porque en el mundo no había unanimidad con esto, se lo incorporó en los estándares como precedente del lavado. Ahora Uruguay también lo haría y cierra esa puerta, porque ha sido una plaza regional para recibir fondos del exterior y tiene un riesgo muy alto de delitos fiscales". Estas palabras reflejan parte de la discusión.

Se han citado también palabras de otras personas, como las del fallecido exsecretario antilavado, Carlos Díaz. Algunas de las cosas que se mencionaron tienen que ver con el proceso por el cual se llega a la elaboración de este proyecto y, al respecto, se ha señalado también la participación y la no participación de otros actores.

Por mi parte, tomaré declaraciones vertidas al diario *El Observador*, el 3 de diciembre de 2016, por el entonces secretario antilavado Carlos Díaz, quien manifestó: "El secretario nacional antilavado, Carlos Díaz, lamentó que se haya filtrado el borrador del proyecto. Pero más allá de los cuestionamientos, al secretario antilavado le 'preocupan' las críticas al actual delito de lavado de dinero, planteadas por el presidente de la SCJ y por la jueza Rieiro.- El secretario antilavado considera que 'el presidente de la SCJ está influyendo sobre los jueces que tienen que actuar en Crimen Organizado, quienes deben juzgar sobre casos de lavado de dinero'". Esto implica un mensaje a los magistrados que dependen de él y de alguna manera se inhibe para actuar en casos de lavado. Es algo que no se entiende. Es desconocer lo que está pasando en el mundo. Traslado esta cita textual porque diputados preopinantes han reconocido la tarea fundamental en la elaboración de este proyecto de ley del doctor Carlos Díaz.

Asimismo, me referiré a un tema que mencionaron algunos diputados y algunas diputadas preopinantes: la incorporación de la responsabilidad de los profesionales que asesoran en este caso.

Con respecto a las consultas o no consultas, hubo un proceso de negociación y discusión de este proyecto, que llevó muchísimo tiempo y que se reflejó también en el debate en el Senado. Durante el tratamiento de este proyecto en la Comisión Especial se incorporó la solicitud de la comparecencia a ese ámbito del Colegio de Abogados del Uruguay y de los doctores Delpiazzo y Cervini, cuya respuesta fue que entendían que su opinión con respecto a este

proyecto ya había sido expresada durante el proceso de discusión en el Senado. Me parece muy bien dejar en claro esto porque se ha puesto sobre la mesa la no comparecencia de los profesionales a la Comisión Especial que trató este proyecto.

También quiero citar a Ricardo Sabella, director y docente certificado en prevención de lavado de dinero en la Universidad Católica del Uruguay, que aseguró a *El Observador* que "[...] 'en todos los esquemas complejos de lavado de activos, los delincuentes son asesorados por profesionales' acerca de la forma en la que pueden ocultarlo, y 'es lo que se quiere evitar'", estableciendo sanciones por no cumplimiento de las normas, que obligan al reporte de las operaciones sospechosas. Repito: estas son declaraciones a la prensa de Ricardo Sabella, realizadas en mayo de 2017. Quería traerlas como insumo para la discusión de este proyecto.

Por último, más que legislar en base a lo que imponen organismos internacionales, en este caso se están aplicando principios de justicia, ya que el lavado de activos repercute en forma negativa en la economía de un país y la desregulación del mercado termina pagándola quienes no acumulan la riqueza.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- Sí, señora diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Pue-de interrumpir la señora diputada.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: queremos dimensionar el carácter internacional y la importancia del tema que estamos tratando, así como enfatizar que el lavado de activos es el fenómeno que devela cómo el capital busca en las nuevas tecnologías, en la globalización y en los intersticios del sistema formas para su mejor control y mayor acumulación, en una suerte de coordinación del producto de acciones de actividades ilegales con actividades legales. Hay documentos internacionales que se refieren a ellos. Por supuesto, nuestro país no puede escapar a ellos, pero debemos tener en cuenta la dimensión y la gravedad del fenómeno.

Específicamente, se dice que para contrarrestar a las organizaciones delincuenciales que buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que generan a partir de sus actividades criminales se hace necesario el esfuerzo del Estado para prevenir y contener el delito. Se hacen necesarias las labores de inteligencia económica, la producción de conocimiento, la colaboración de los ciudadanos con las autoridades y la colaboración público-privada en general.

Como dijo el señor diputado Asti -se me está pidiendo que sea breve; no pertenezco a la Comisión pero se me había pedido que fundamentara sobre el tema-, se han hecho objeciones a la parte normativa y de la creación de delito. Básicamente, esa será mi intervención.

Ya existen más de diez normas legales desde fines de los años noventa: dos de 1998, una de 2001, dos de 2004, una de 2006, una de 2008, una de 2009, una de 2012 y una de 2013, además de la convenciones internacionales y los acuerdos que se han adoptado a nivel internacional y forman parte de nuestra normativa interna que, reitero, no es exclusiva de los gobiernos del Frente Amplio.

Las conductas constitutivas del lavado de activos no son nuevas, sino que constituyen el correlato lógico que permite el ingreso a la economía formal de los bienes o el producido de actividades delictivas a través de distintas formas o apariencias que disimulan su origen ilícito. Históricamente, el derecho penal ha previsto figuras delictivas para las actividades inmediatamente conexas a un delito previo para disimular su origen ilícito a través de los delitos de encubrimiento y receptación.

Es a partir de la Convención de Viena de 1988 que la comunidad internacional recibió directivas tendientes a adoptar una serie de mecanismos destinados a la identificación de bienes de origen ilícito y a la penalización de etapas anteriores o alejadas de la consumación del delito previo a través de la creación de los delitos de lavado de activos. Quiero hacer referencia a lo que se hará a través del proyecto que aprobaremos, que es recoger lo ya establecido por la normativa vigente en los artículos 54, 55, 56 y 57 del Decreto-Ley Nº 14.294, del 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por la Ley Nº 17.016, del 22 de octubre de 1998, y por el artículo 13 de la Ley Nº 17.835, del 14 de setiembre de 2004, norma que fue aprobada por unanimidad, como han sido todas las leyes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Lo que se incorpora en el artículo 34 son los delitos precedentes. Todas son figuras delictivas que surgen a partir de situaciones graves. No estamos hablando de cuestiones ínfimas o mínimas en nuestro ordenamiento jurídico.

Tal como dijo el señor diputado Asti, habría necesidad -compartimos algunas apreciaciones realizadas por los señores diputados preopinantes, fundamentalmente por el señor diputado Pasquet- de adecuar este proyecto al nuevo Código del Proceso Penal, sobre todo en materia de medidas cautelares.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar la señora diputada Bettiana Díaz Rey.

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- Señor presidente...

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- ¿Me permite otra interrupción?

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- Sí, señora diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir la señora diputada.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: también nos comprometemos a hacer el análisis correspondiente, pero creemos que dada la relevancia del tema que estamos considerando y en virtud de que, como establece el proyecto de ley, lo que busca es la actualización de la normativa en cuanto al lavado de activos, nos parece pertinente aprobarlo tal como viene del Senado. Asimismo, como existe la necesidad de ajustar otras normas que hemos ido legislando en este período, nos comprometemos a adecuarlo al nuevo Código del Proceso Penal.

Gracias, señora diputada. Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar la señora diputada Bettiana Díaz Rey.

SEÑORA DÍAZ REY (Bettiana).- He finalizado, señor presidente.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora diputada.

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presi-dente: desgraciadamente, hay que contestar ciertas cosas, aunque estemos disponiendo del tiempo de todos nosotros.

El tema de la colaboración internacional para perseguir delitos que son superiores a los que antiguamente se llamaban "de cuello blanco" y que ahora son "de cuello dorado", data de comienzos de la década del noventa. Quienes trabajamos en derecho penal financiero, hicimos las primeras informaciones y cursos a nivel internacional en el año 1994, cuando en el Uruguay ni siquiera había computadoras de uso doméstico.

Está claro que hice referencia a la normativa. No estamos buscando confrontación acerca de si es del Frente Amplio. Parece que no quedó claro que, al menos mi espíritu, desde el primer momento, fue tratar de que este proyecto se aprobara en general, con las objeciones que tenemos, pero la primera señora diputada a la que solicité una interrupción efectuó afirmaciones un tanto delicadas. No me gusta hablar de los dichos de personas fallecidas, pero habiendo conocido al licenciado Carlos Díaz, no tengo ninguna duda de que nunca presumió que la Suprema Corte de Justicia influía en los jueces, sobre todo, los de crimen organizado. Es algo que no voy a dejar pasar. Quiero que quede claro.

Nuestra Suprema Corte de Justicia, a veces, en contra de nuestra opinión -porque querríamos que interviniera más-, fiel a la autonomía, respeta a los jueces, porque no puede ni debe -no lo hace- incidir en ellos. A lo largo de la historia, hemos podido probar personalmente que la Suprema Corte de Justicia es muy cuidadosa -al menos, lo ha sido hasta ahora- con respecto a la incidencia en los jueces. Nuestro sistema judicial es muy bueno, entre otras cosas, porque los jueces tienen autonomía técnica y, hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia los ha respetado. No sé cuál fue el origen de las palabras del licenciado Carlos Díaz pero, reitero, más allá del respeto que le tengo, no puedo preguntárselo, porque ha fallecido, y me parece que ni siquiera se tendría que haber traído a colación.

Con respecto a los doctores Cervini y Delpiazzo, no vinieron a la Cámara de Diputados. Yo pedí que concurrieran, pero como no hago amiguismo y respeto el nivel académico de los doctores Cervini y Delpiazzo, no los consulté antes. Yo pedí su comparecencia y los dos enviaron diferentes notas. El doctor Delpiazzo entendió que no era su especialidad. Sucede que la gente que sabe mucho conoce cuando se tiene que callar. El doctor Delpiazzo, como es catedrático de Derecho Administrativo y constitucionalista, entendió que en el tema específico de lavado de activos no tenía que opinar en la Comisión, más allá de que yo he compartido con él seminarios en los que ha hablado sobre este tema y, específicamente, sobre la constitucionalidad de algunas normas que nosotros estamos cuestionando.

El doctor Cervini se excusó por otra razón, por un tema de su actividad privada que no viene al caso.

El señor Sabella, con quien somos amigos desde hace mucho tiempo, se dedica a organizar seminarios para oficiales de cumplimiento de los bancos. No es un especialista jurídico, no es un catedrático, es una persona que sabe muchísimo del control de las investigaciones que deben hacer los oficiales de cumplimiento de los bancos y de las casas bancarias que, en realidad, ya vimos que no están obligados a hacerlo, pero si son honestos, lo hacen. Asimismo, concurrimos personas que queremos saber hasta dónde se puede llegar a investigar, inclusive, no correspondiéndonos. Va mucho más allá de lo que tenemos que hacer los profesionales. O sea que en este caso no hay problema de corporativismo de ninguna de las asociaciones de profesionales.

Aclaro que ninguna de las tres asociaciones profesionales -Colegio de Abogados del Uruguay, Colegio de Contadores, Economistas y Adminis-tradores del Uruguay y Asociación de Escribanos del Uruguay- está de acuerdo con lo que se les impone. Lo que pasa es que como son profesionales del derecho, cumplen con las obligaciones legales, más allá de que las cuestionan, de que no están de acuerdo y lo hacen a regañadientes, tal como han manifestado en la Comisión.

Quiero hacer una última aclaración porque siempre salen los ricos, los pobres, los empresarios y los que acumulan riqueza. Mire, señor presidente: el que dijo -lo podemos buscar en la versión taquigráfica de la Comisión- que uno de los problemas graves tiene que ver con que el lavado de activos no es solamente de los grandes capitales, fue el director de la Secretaría Nacional antilavado de activos, Espinosa, quien manifestó que el Betito -nunca me voy a olvidar- no lava comprando estancias: lava comprando pequeños ranchos en el Cuarenta Semanas.

Muchas gracias, señor presidente.

20.- Lavado de activos. (Actualización de la normativa vigente)

—Continúa la consideración del asunto en debate.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

—Setenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: quisiera plantear una propuesta de procedimiento.

Mocionamos para que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque, desglosando algunos artículos acerca de los que varios legisladores de los distintos partidos han planteado observaciones. Concretamente, se solicita el desglose de los artículos 4° a 8°, 13, 19, 20, 34, 35, 36 y 41 a 48, inclusive.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Vamos a reiterar lo que se ha propuesto para que a todos nos quede claro.

Se ha solicitado la supresión de la lectura y la votación en bloque del proyecto de ley, desglosando los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 13, 19, 20, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48.

Se va a votar si se suprime la lectura del articulado y se vota en bloque el proyecto de ley, desglosando los artículos mencionados.

—Setenta y siete en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se suprime la lectura del articulado y se va a votar en bloque el proyecto de ley, desglosando los artículos mencionados.

—Setenta y ocho en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 4º a 8º, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque.

—Setenta en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: deseo dejar constancia de que los legisladores del Partido Colorado presentes en sala hemos votado negativamente estos artículos.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: quisiera dejar constancia de que he votado afirmativamente estos artículos, por estricta disciplina a mi Partido y a la decisión que adoptó la diputada de mi Partido integrante de la Comisión.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: quisiera dejar constancia de que el Partido Independiente ha votado negativamente los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- En discusión el artículo 13.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: de acuerdo con lo que me han anotado los legisladores que hicieron observaciones, en el artículo 13 hay objeciones solamente a los literales C), D) y J).

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 13, desglosando los literales C), D) y J).

—Setenta y seis en setenta y nueve: AFIRMATIVA.
En discusión los literales C), D) y J) del artículo 13.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar esos literales.

—Cincuenta y dos en setenta y nueve: AFIRMATIVA.
En discusión el artículo 19.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Cincuenta y dos en setenta y nueve: AFIRMATIVA.
En discusión el artículo 20.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Cincuenta en setenta y nueve: AFIRMATIVA.
En discusión el artículo 34.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Cincuenta en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: tengo entendido que el desglose del artículo 34 correspondía solamente al numeral 25); por lo menos, nosotros habíamos hecho acuerdo en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- A la Mesa ha llegado la propuesta de desglose del artículo 34, pero si el diputado hace otro planteamiento, está en su derecho.

—Se va a reconsiderar la discusión del artículo 34.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Setenta y cuatro en setenta y ocho: AFIRMATIVA.
En discusión nuevamente el artículo 34.
Se va a poner a votación el artículo, con excepción del numeral 25).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Setenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
En discusión el numeral 25) del artículo 34.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Cincuenta en setenta y ocho: AFIRMATIVA.
En discusión el artículo 35.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Cincuenta en setenta y ocho: AFIRMATIVA.
En discusión el artículo 36.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Cincuenta y dos en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: propongo votar en bloque desde el artículo 41 hasta el 48 inclusive.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 41 al 48 inclusive.

—Setenta en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: por todo lo expuesto y por la necesidad de que esta ley entre en vigencia lo antes posible, solicito que se comunique de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar.

—Setenta y seis en setenta y ocho: AFIRMATIVA.